



---

# FGR

FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

---

COMITÉ DE  
TRANSPARENCIA<sup>1</sup>

**DÉCIMA SESIÓN  
ORDINARIA 2020  
17 DE MARZO DE 2020**

---

<sup>1</sup> En términos de lo dispuesto en los transitorios Sexto, Noveno, fracciones III, IV y VI y Décimo Segundo, fracción II del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y su DECLARATORIA de entrada en vigor que le confiere Autonomía Constitucional; así como en los artículos 1, 3, y 6 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y se conforma el Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República.



## CONSIDERACIONES

Con motivo de las publicaciones de fecha 14 y 20 de diciembre de 2018 respectivamente en el Diario Oficial de la Federación, del Decreto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y de la DECLARATORIA de entrada en vigor de la Autonomía Constitucional de la Fiscalía General de la República; se desprende que dicha normativa tiene por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República como **Órgano Público Autónomo**, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás disposiciones aplicables, y por la cual se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En esa tesitura, en tanto se avanza en la transición orgánica de la Fiscalía General de la República, se debe tomar en consideración lo previsto en los transitorios Sexto, Noveno, fracciones III, IV y VI y Décimo Segundo, fracción II del Decreto aludido, que citan:

**Sexto.** Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General de la República, **se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su titular respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes.** Las referencias normativas a los agentes del Ministerio Público se entenderán referidas a las y los Fiscales en los términos de esta Ley.

**Noveno. A partir de su nombramiento, la persona titular de la Fiscalía General de la República, contará con un plazo de un año para definir** la estrategia de transición, a partir de la realización de un inventario integral y un diagnóstico de los recursos financieros, humanos y materiales, casos pendientes, procesos de colaboración e inteligencia y cualquier otro insumo que considere necesario para la integración de un Plan Estratégico de Transición. Priorizará en orden de importancia el establecimiento del Servicio Profesional de Carrera y su Estatuto, la consolidación del sistema de información y análisis estratégico para la función fiscal, **así como la reestructura y definición de los órganos administrativos** y los sustantivos para la función fiscal.

...

III. Estrategia específica respecto al **personal en activo** y al reclutamiento de nuevos talentos, que contemple a su vez esquemas de retiro, liquidación, certificación, capacitación, desarrollo y gestión del cambio;

IV. Estrategia para el **diseño y activación de la nueva estructura organizativa**; así como del proceso de cierre de las estructuras y procesos previos;

...

VI. Estrategia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas del proceso de transición que asegure la publicidad y mecanismos necesarios para el seguimiento, colaboración y vigilancia;



...  
**Décimo Segundo. El proceso de transición del personal** de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República se llevará a cabo de acuerdo con el Plan Estratégico de Transición y será coordinado por la Unidad a cargo. Este proceso deberá llevarse a cabo conforme a los siguientes lineamientos:

...  
**II. El personal adscrito a la Procuraduría General de la República que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento, continuará en la función que desempeña** y tendrá derecho a participar en el proceso de elección para acceder al Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República **en términos de los principios establecidos en la presente Ley.** Para ello, se garantizará su acceso a los programas de formación, entrenamiento, fortalecimiento de capacidades y evaluación durante el periodo de transición, en los términos establecidos en los lineamientos provisionales;

...  
Lo anterior, en correlación con los artículos 1, 3 y 6 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el **Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y se conforma el Comité de Transparencia** de la Procuraduría General de la República, que señalan:

**Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer la organización y el funcionamiento de la Procuraduría General de la República** para el despacho de los asuntos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su Ley Orgánica y otros ordenamientos encomiendan a la Institución, al Procurador General de la República y al Ministerio Público de la Federación.

**Artículo 3. Para el cumplimiento de los asuntos competencia de la Procuraduría,** de su Titular y del Ministerio Público de la Federación, **la Institución contará con las unidades administrativas** y órganos desconcentrados siguientes:

...  
Cada Subprocuraduría, la Oficialía Mayor, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Visitaduría General, cada Órgano Desconcentrado y **cada unidad administrativa especializada creada mediante Acuerdo del Procurador** contará con una coordinación administrativa que se encargará de atender los requerimientos de operación de las áreas bajo su adscripción, lo cual incluye la gestión de **recursos financieros, materiales y humanos.**

...  
**Artículo 6. Las facultades de los titulares de las unidades administrativas** y órganos desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, **se ejercerán por su conducto y por el personal a su cargo, de conformidad con las normas aplicables y lo que establezca el Procurador.**

La comunicación, actividades y flujo de información de las unidades administrativas y órganos desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, podrán realizarse mediante el uso de medios electrónicos, digitales u otra tecnología, de conformidad con los lineamientos que dicte el Procurador.



En dicho tenor, conviene señalar que cualquier referencia a la entonces Procuraduría General de la República, se entenderá realizada a la ahora Fiscalía General de la República.

3



## INTEGRANTES

**Lcda. Adi Loza Barrera.**

**Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y Presidenta del Comité de Transparencia.**

En términos de lo dispuesto en el Acuerdo A/072/2016 por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Procuraduría General de la República y se conforma el Comité de Transparencia, en concordancia con el artículo 64, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF., 9.V.2016).



**Mtro. Ray Manuel Hernández Sánchez.**

**Suplente del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, y responsable del Área Coordinadora de Archivos en la Fiscalía General de la República.**

En términos de lo dispuesto en los artículos 18, fracción VII y 66, fracción VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el artículo 64, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**Lic. Gerardo Vázquez González de la Vega.**

**Suplente del Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República.**

En términos de lo dispuesto en los artículos 14, fracción X y 34 fracción XII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; así como los ACUERDOS: A/009/2019 por el que se instala el Órgano Interno de Control, el A/014/2019 por el que se crean las unidades administrativas del Órgano Interno de Control y Numeral SEGUNDO, fracción IV, inciso c) del A/OI/001/2019 por el que se distribuyen las facultades del Órgano Interno de Control entre sus unidades administrativas, publicados en el DOF el 14 de diciembre de 2018, 9 de mayo y 25 de septiembre de 2019, respectivamente.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**SEDE:** Ciudad de México  
Av. Insurgentes No. 20, Piso 8,  
Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc.  
Auditorio 22 de octubre, sección 2

## PRESENTACIÓN

### LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

Siendo las trece horas con nueve minutos del martes diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el Auditorio 22 de octubre, sección 2, piso 8 del inmueble ubicado en la Avenida Insurgentes, número 20, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, la Secretaria Técnica verificó la asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia, encontrándose presentes la Presidenta del Comité de Transparencia; el representante del Área Coordinadora de Archivos y el representante del Órgano Interno de Control, por lo que de conformidad con los numerales Sexto y Séptimo del Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y se conforma el Comité de Transparencia de la Unidad de Transparencia Procuraduría General de la República, se da cuenta que hay quórum legal para sesionar.

Del mismo modo, se asienta que se encuentran presentes los enlaces de transparencia de las diversas unidades administrativas de los cuales queda evidencia con el registro autógrafo de su firma, en la lista de asistencia de la actual sesión.



## DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

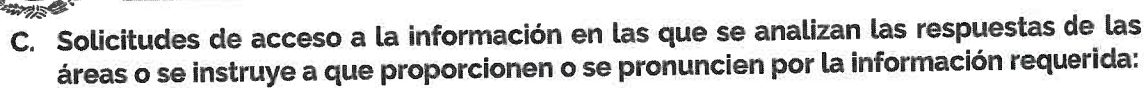
- I. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
- II. Aprobación del Acta de la Sesión inmediata anterior.
- III. Análisis y resolución de las solicitudes de acceso a la información y solicitudes de datos personales:

**A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la inexistencia de la información requerida:**

- |       |                     |
|-------|---------------------|
| A.1.  | Folio 0001700346020 |
| A.2.  | Folio 0001700346220 |
| A.3.  | Folio 0001700346320 |
| A.4.  | Folio 0001700346420 |
| A.5.  | Folio 0001700346620 |
| A.6.  | Folio 0001700346720 |
| A.7.  | Folio 0001700346820 |
| A.8.  | Folio 0001700346920 |
| A.9.  | Folio 0001700347020 |
| A.10. | Folio 0001700347120 |
| A.11. | Folio 0001700347220 |
| A.12. | Folio 0001700347320 |
| A.13. | Folio 0001700347420 |
| A.14. | Folio 0001700347920 |

**B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la clasificación de reserva y/o confidencialidad de la información requerida:**

- |       |                     |
|-------|---------------------|
| B.1.  | Folio 0001700164520 |
| B.2.  | Folio 0001700322520 |
| B.3.  | Folio 0001700330120 |
| B.4.  | Folio 0001700336820 |
| B.5.  | Folio 0001700341320 |
| B.6.  | Folio 0001700344320 |
| B.7.  | Folio 0001700344720 |
| B.8.  | Folio 0001700348020 |
| B.9.  | Folio 0001700348620 |
| B.10. | Folio 0001700359420 |
| B.11. | Folio 0001700383020 |
| B.12. | Folio 0001700385620 |
| B.13. | Folio 0001700395220 |
| B.14. | Folio 0001700395520 |
| B.15. | Folio 0001700399520 |



**D. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la ampliación de término para dar respuesta a la información requerida:**

- |       |                                |
|-------|--------------------------------|
| D.1.  | Folio 1700700000420 - FAEFVCJC |
| D.2.  | Folio 0001700312120            |
| D.3.  | Folio 0001700336420            |
| D.4.  | Folio 0001700340420            |
| D.5.  | Folio 0001700340720            |
| D.6.  | Folio 0001700343420            |
| D.7.  | Folio 0001700343530            |
| D.8.  | Folio 0001700343620            |
| D.9.  | Folio 0001700344620            |
| D.10. | Folio 0001700345620            |
| D.11. | Folio 0001700345920            |
| D.12. | Folio 0001700347820            |
| D.13. | Folio 0001700348920            |
| D.14. | Folio 0001700350020            |
| D.15. | Folio 0001700350220            |
| D.16. | Folio 0001700350920            |
| D.17. | Folio 0001700352020            |

E.1. Folio 0001700381620 – RRA 14823/19

## The image shows a section of white paper with horizontal blue lines. There are two handwritten blue ink marks. One is a small, simple loop in the upper right corner. The other is a larger, more complex scribble in the lower right corner, consisting of several overlapping loops and a vertical line extending downwards.





**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE  
TRANSPARENCIA**

## ABREVIATURAS

**FGR** – Fiscalía General de la República.

**OF** – Oficina del C. Fiscal General de la República.

**CA** – Coordinación Administrativa

**SJAI** – Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.

**SCRPPA** – Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.

**SEIDO** – Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

**SEIDF** – Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

**FEMDH** – Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.

**CMI** – Coordinación de Métodos de Investigación

**CPA** – Coordinación de Planeación y Administración.

**CAIA** – Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías.

**CGSP** – Coordinación General de Servicios Periciales.

**COPLADII** – Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional

**CFySPC** – Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera.

**CENAPI** – Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

**PFM** – Policía Federal Ministerial.

**FEADLE** – Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión.

**FEDE** – Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. (Antes FEPADE)

**FEAI** – Fiscalía Especializada en Asuntos Internos. (Antes VG)

**FEVIMTRA** – Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

**UEAF** – Unidad Especializada en Análisis Financiero.

**UTAG** – Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental.

**DGCS** – Dirección General de Comunicación Social.

**DGALEYN** – Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad.

**OIC** – Órgano Interno de Control.

**INAI** – Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

**LFTAIP** – Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

**CFPP** – Código Federal de Procedimientos Penales

**CNPP** – Código Nacional de Procedimientos Penales.

**CPEUM** – Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Y Unidades Administrativas diversas y Órganos Desconcentrados descritos en el Acuerdo A/238/12, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, así como las contempladas en otras normativas aplicables.





**A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la inexistencia de la información requerida:**

**A.1. Folio de la solicitud 0001700346020**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
|                                 |   |
| <b>Síntesis</b>                 | Escrito de queja inmerso en el expediente QU-000018/2006 que se presentó ante el Órgano Interno de Control en el año 2006 |
| <b>Sentido de la resolución</b> | Confirma  |
| <b>Rubro</b>                    | Inexistencia  |

**Contenido de la Solicitud:**

"1.-Solicito una versión pública del **expediente de QUEJA Y/O denuncia QU-000018/2006** que se presentó ante el **órgano interno de control** de la PGR en **2006**. Quiero señalar que solo requiero el **escrito de queja presentado en el mencionado expediente**. 2.-En una solicitud de información, la SFP informó que dicha información obraba en el OIC de la FGR." (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OIC**.

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0201/2020:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la declaratoria de **inexistencia** del expediente solicitado por el particular, en términos del **artículo 141** de la LFTAIP, en relación con el **criterio de interpretación 04/19** emitido por el Pleno del INAI, que a la letra señala:

**Propósito de la declaración formal de inexistencia.** El propósito de que los Comités de Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada, **es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés;** por lo cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal de inexistencia debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.



Aunado a que, de una búsqueda exhaustiva de la información públicamente disponible en el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se localizó diversa información relacionada con la baja definitiva de archivo vencido (procedimientos de responsabilidad administrativa, quejas y denuncias e inconformidades) de la entonces Procuraduría General de la República, correspondientes a los **años 1985, 1987-2006**, en la cual se desprende que el 21 de mayo de 2009, el entonces encargado del Archivo de Trámite del OIC en mención, ordenó la baja de la mencionada documentación, toda vez que ya se había cumplido los 2 años de guarda precautoria que dispone el Catálogo de Disposiciones Documentales de la SFP.

En consecuencia, en razón que no fue posible localizar documental o antecedente del documento al que se hace referencia en el requerimiento, este Órgano Colegiado consideró pertinente declarar la inexistencia de la información materia de la búsqueda dentro de los archivos de esta Fiscalía General de la República, de conformidad con lo establecido en el precepto legal señalado.

[illegible]





A.2. Folio de la solicitud 0001700346220

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Síntesis                 | Escrito de queja inmerso en el expediente DE-000182/2006 que se presentó ante el Órgano Interno de Control en el año 2006 |
| Sentido de la resolución | Confirma  |
| Rubro                    | Inexistencia  |

**Contenido de la Solicitud:**

"1.-Solicito una versión pública del **expediente de denuncia DE-000182/2006** que se presentó ante el **órgano interno de control** de la PGR el **19/06/2006**. Quiero señalar que solo requiero **el escrito de queja presentado** en el mencionado expediente. 2.-En una solicitud de información, la SFP informó que el expediente obraba en el OIC de la FGR" (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OIC**.

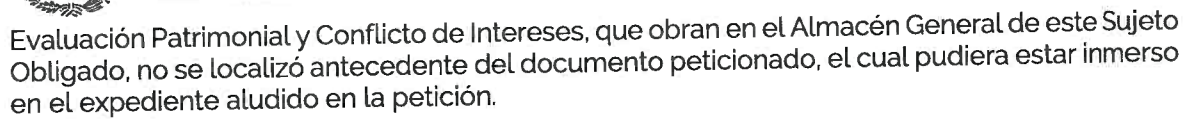
**ACUERDO**

**CT/ACDO/0202/2020:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la declaratoria de **inexistencia** del expediente solicitado por el particular, en términos del **artículo 141** de la LFTAIP, en relación con el **criterio de interpretación 04/19** emitido por el Pleno del INAI, que a la letra señala:

**Propósito de la declaración formal de inexistencia.** El propósito de que los Comités de Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada, **es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés**; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal de inexistencia debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.

Lo anterior, en virtud de que el Órgano Interno de Control, tras haber efectuado una búsqueda exhaustiva en los archivos de la entonces Área de Quejas, ahora Área de Investigaciones,



Aunado a que, de una búsqueda exhaustiva de la información públicamente disponible en el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se localizó diversa información relacionada con la baja definitiva de archivo vencido (procedimientos de responsabilidad administrativa, quejas y denuncias e inconformidades) de la entonces Procuraduría General de la República, correspondientes a los **años 1985, 1987-2006**, en la cual se desprende que el 21 de mayo de 2009, el entonces encargado del Archivo de Trámite del OIC en mención, ordenó la baja de la mencionada documentación, toda vez que ya se había cumplido los 2 años de guarda precautoria que dispone el Catálogo de Disposiciones Documentales de la SFP.

En consecuencia, en razón que no fue posible localizar documental o antecedente del documento al que se hace referencia en el requerimiento, este Órgano Colegiado consideró pertinente declarar la inexistencia de la información materia de la búsqueda dentro de los archivos de esta Fiscalía General de la República, de conformidad con lo establecido en el precepto legal señalado.

Décima Sesión Ordinaria



A.3. Folio de la solicitud 0001700346320

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Síntesis                 | Escrito de queja inmerso en el expediente DE-000183/2006 que se presentó ante el Órgano Interno de Control en el año 2006 |
| Sentido de la resolución | Confirma  |
| Rubro                    | Inexistencia  |

**Contenido de la Solicitud:**

"1.-Solicito una versión pública del **expediente de denuncia DE-000183/2006** que se presentó ante el **órgano interno de control** de la PGR el **19/06/2006**. Quiero señalar que solo requiero el escrito de queja presentado en el mencionado expediente. 2.-En una solicitud de información, la SFP INFORMÓ que dicho expediente obraba en el OIC de la FGR" (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OIC**.

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0203/2020:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la declaratoria de **inexistencia** del expediente solicitado por el particular, en términos del **artículo 141** de la LFTAIP, en relación con el **criterio de interpretación 04/19** emitido por el Pleno del INAI, que a la letra señala:

**Propósito de la declaración formal de inexistencia.** El propósito de que los Comités de Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada, **es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés**; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal de inexistencia debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.



Aunado a que, de una búsqueda exhaustiva de la información públicamente disponible en el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se localizó diversa información relacionada con la baja definitiva de archivo vencido (procedimientos de responsabilidad administrativa, quejas y denuncias e inconformidades) de la entonces Procuraduría General de la República, correspondientes a los **años 1985, 1987-2006**, en la cual se desprende que el 21 de mayo de 2009, el entonces encargado del Archivo de Trámite del OIC en mención, ordenó la baja de la mencionada documentación, toda vez que ya se había cumplido los 2 años de guarda precautoria que dispone el Catálogo de Disposiciones Documentales de la SFP.

En consecuencia, en razón que no fue posible localizar documental o antecedente del documento al que se hace referencia en el requerimiento, este Órgano Colegiado consideró pertinente declarar la inexistencia de la información materia de la búsqueda dentro de los archivos de esta Fiscalía General de la República, de conformidad con lo establecido en el precepto legal señalado.

[illegible]





A.4. Folio de la solicitud 0001700346420

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Síntesis                 | Escrito de queja inmerso en el expediente DE-000206/2006 que se presentó ante el Órgano Interno de Control en el año 2006 |
| Sentido de la resolución | Confirma  |
| Rubro                    | Inexistencia  |

**Contenido de la Solicitud:**

"1.-Solicito una versión pública del expediente de **denuncia DE-000206/2006** que se presentó ante el **órgano interno de control** de la PGR el **10/07/2006**. Quiero señalar que solo requiero el **escrito de queja presentado en el mencionado expediente**. 2.-En una solicitud de información, la SFP informó que dicho expediente obraba en la FGR." (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OIC**.

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0204/2020:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la declaratoria de **inexistencia** del expediente solicitado por el particular, en términos del **artículo 141** de la LFTAIP, en relación con el **criterio de interpretación 04/19** emitido por el Pleno del INAI, que a la letra señala:

**Propósito de la declaración formal de inexistencia.** El propósito de que los Comités de Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada, **es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés**; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal de inexistencia debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.



Aunado a que, de una búsqueda exhaustiva de la información públicamente disponible en el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se localizó diversa información relacionada con la baja definitiva de archivo vencido (procedimientos de responsabilidad administrativa, quejas y denuncias e inconformidades) de la entonces Procuraduría General de la República, correspondientes a los **años 1985, 1987-2006**, en la cual se desprende que el 21 de mayo de 2009, el entonces encargado del Archivo de Trámite del OIC en mención, ordenó la baja de la mencionada documentación, toda vez que ya se había cumplido los 2 años de guarda precautoria que dispone el Catálogo de Disposiciones Documentales de la SFP.

En consecuencia, en razón que no fue posible localizar documental o antecedente del documento al que se hace referencia en el requerimiento, este Órgano Colegiado consideró pertinente declarar la inexistencia de la información materia de la búsqueda dentro de los archivos de esta Fiscalía General de la República, de conformidad con lo establecido en el precepto legal señalado.

[illegible]



**A.5. Folio de la solicitud 0001700346620**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Síntesis</b>                 | Escrito de queja inmerso en el expediente DE-000207/2006 que se presentó ante el Órgano Interno de Control en el año 2006 |
| <b>Sentido de la resolución</b> | Confirma  |
| <b>Rubro</b>                    | Inexistencia  |

**Contenido de la Solicitud:**

"1.-Solicito una versión pública del **expediente de denuncia DE-000207/2006** que se presentó ante el **órgano interno de control** de la PGR el **10/07/2006**. Quiero señalar que solo requiero el **escrito de queja presentado en el mencionado expediente**. 2.-En una solicitud de información, la SFP informó que dicho expediente obraba en la FGR." (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OIC**.

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0205/2020:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la declaratoria de **inexistencia** del expediente solicitado por el particular, en términos del **artículo 141** de la LFTAIP, en relación con el **criterio de interpretación 04/19** emitido por el Pleno del INAI, que a la letra señala:

**Propósito de la declaración formal de inexistencia.** El propósito de que los Comités de Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada, **es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés**; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal de inexistencia debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.



Aunado a que, de una búsqueda exhaustiva de la información públicamente disponible en el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se localizó diversa información relacionada con la baja definitiva de archivo vencido (procedimientos de responsabilidad administrativa, quejas y denuncias e inconformidades) de la entonces Procuraduría General de la República, correspondientes a los **años 1985, 1987-2006**, en la cual se desprende que el 21 de mayo de 2009, el entonces encargado del Archivo de Trámite del OIC en mención, ordenó la baja de la mencionada documentación, toda vez que ya se había cumplido los 2 años de guarda precautoria que dispone el Catálogo de Disposiciones Documentales de la SFP.

En consecuencia, en razón que no fue posible localizar documental o antecedente del documento al que se hace referencia en el requerimiento, este Órgano Colegiado consideró pertinente declarar la inexistencia de la información materia de la búsqueda dentro de los archivos de esta Fiscalía General de la República, de conformidad con lo establecido en el precepto legal señalado.

[illegible]





A.6. Folio de la solicitud 0001700346720

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Síntesis                 | Escrito de queja inmerso en el expediente QU- 000163/2006 que se presentó ante el Órgano Interno de Control en el año 2006 |
| Sentido de la resolución | Confirma   |
| Rubro                    | Inexistencia   |

**Contenido de la Solicitud:**

"1.-Solicito una versión pública del **expediente de queja QU- 000163/2006** que se presentó ante el **órgano interno de control** de la PGR el **11/10/2006**. Quiero señalar que solo requiero el **escrito de queja presentado en el mencionado expediente**. 2.- En una solicitud de información, la SFP informó que dicho expediente obraba en la FGR.." (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OIC**.

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0206/2020:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la declaratoria de **inexistencia** del expediente solicitado por el particular, en términos del **artículo 141** de la LFTAIP, en relación con el **criterio de interpretación 04/19** emitido por el Pleno del INAI, que a la letra señala:

**Propósito de la declaración formal de inexistencia.** El propósito de que los Comités de Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada, **es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés**; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal de inexistencia debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.



Aunado a que, de una búsqueda exhaustiva de la información públicamente disponible en el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se localizó diversa información relacionada con la baja definitiva de archivo vencido (procedimientos de responsabilidad administrativa, quejas y denuncias e inconformidades) de la entonces Procuraduría General de la República, correspondientes a los **años 1985, 1987-2006**, en la cual se desprende que el 21 de mayo de 2009, el entonces encargado del Archivo de Trámite del OIC en mención, ordenó la baja de la mencionada documentación, toda vez que ya se había cumplido los 2 años de guarda precautoria que dispone el Catálogo de Disposiciones Documentales de la SFP.

En consecuencia, en razón que no fue posible localizar documental o antecedente del documento al que se hace referencia en el requerimiento, este Órgano Colegiado consideró pertinente declarar la inexistencia de la información materia de la búsqueda dentro de los archivos de esta Fiscalía General de la República, de conformidad con lo establecido en el precepto legal señalado.

[illegible]



A.7. Folio de la solicitud 0001700346820

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Síntesis                 | Escrito de queja inmerso en el expediente DE-000342/2006 que se presentó ante el Órgano Interno de Control en el año 2006 |
| Sentido de la resolución | Confirma  |
| Rubro                    | Inexistencia  |

**Contenido de la Solicitud:**

"1.-Solicito una versión pública del expediente de **denuncia DE-000342/2006** que se presentó ante el **órgano interno de control** de la PGR el **29/11/2006**. Quiero señalar que solo requiero el **escrito de queja presentado en el mencionado expediente**. 2.-En una solicitud de información, la SFP informó que dicho expediente obraba en la FGR." (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

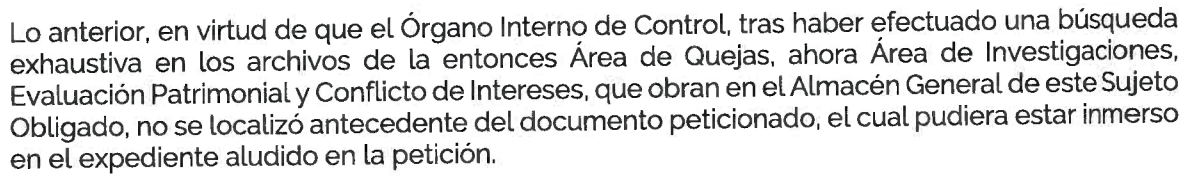
Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OIC**.

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0207/2020:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la declaratoria de **inexistencia** del expediente solicitado por el particular, en términos del **artículo 141** de la LFTAIP, en relación con el **criterio de interpretación 04/19** emitido por el Pleno del INAI, que a la letra señala:

**Propósito de la declaración formal de inexistencia.** El propósito de que los Comités de Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada, **es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés**; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal de inexistencia debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.



Aunado a que, de una búsqueda exhaustiva de la información públicamente disponible en el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se localizó diversa información relacionada con la baja definitiva de archivo vencido (procedimientos de responsabilidad administrativa, quejas y denuncias e inconformidades) de la entonces Procuraduría General de la República, correspondientes a los **años 1985, 1987-2006**, en la cual se desprende que el 21 de mayo de 2009, el entonces encargado del Archivo de Trámite del OIC en mención, ordenó la baja de la mencionada documentación, toda vez que ya se había cumplido los 2 años de guarda precautoria que dispone el Catálogo de Disposiciones Documentales de la SFP.

En consecuencia, en razón que no fue posible localizar documental o antecedente del documento al que se hace referencia en el requerimiento, este Órgano Colegiado consideró pertinente declarar la inexistencia de la información materia de la búsqueda dentro de los archivos de esta Fiscalía General de la República, de conformidad con lo establecido en el precepto legal señalado.





A.8. Folio de la solicitud 0001700346920

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Síntesis                 | Escrito de queja inmerso en el expediente DE-000343/2006 que se presentó ante el Órgano Interno de Control en el año 2006 |
| Sentido de la resolución | Confirma  |
| Rubro                    | Inexistencia  |

**Contenido de la Solicitud:**

"1.-Solicito una versión pública del **expediente de denuncia DE-000343/2006** que se presentó ante el **órgano interno de control** de la PGR el **29/11/2006**. Quiero señalar que solo requiero el **escrito de queja presentado en el mencionado expediente**. 2.-En una solicitud de información, la SFP informó que dicho expediente obraba en la FGR" (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OIC**.

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0208/2020:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la declaratoria de **inexistencia** del expediente solicitado por el particular, en términos del **artículo 141** de la LFTAIP, en relación con el **criterio de interpretación 04/19** emitido por el Pleno del INAI, que a la letra señala:

**Propósito de la declaración formal de inexistencia.** El propósito de que los Comités de Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada, **es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés**; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal de inexistencia debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.



**FGR**  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE TRANSPARENCIA**

Lo anterior, en virtud de que el Órgano Interno de Control, tras haber efectuado una búsqueda exhaustiva en los archivos de la entonces Área de Quejas, ahora Área de Investigaciones, Evaluación Patrimonial y Conflicto de Intereses, que obran en el Almacén General de este Sujeto Obligado, no se localizó antecedente del documento peticionado, el cual pudiera estar inmerso en el expediente aludido en la petición.

Aunado a que, de una búsqueda exhaustiva de la información públicamente disponible en el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se localizó diversa información relacionada con la baja definitiva de archivo vencido (procedimientos de responsabilidad administrativa, quejas y denuncias e inconformidades) de la entonces Procuraduría General de la República, correspondientes a los **años 1985, 1987-2006**, en la cual se desprende que el 21 de mayo de 2009, el entonces encargado del Archivo de Trámite del OIC en mención, ordenó la baja de la mencionada documentación, toda vez que ya se había cumplido los 2 años de guarda precautoria que dispone el Catálogo de Disposiciones Documentales de la SFP.

En consecuencia, en razón que no fue posible localizar documental o antecedente del documento al que se hace referencia en el requerimiento, este Órgano Colegiado consideró pertinente declarar la inexistencia de la información materia de la búsqueda dentro de los archivos de esta Fiscalía General de la República, de conformidad con lo establecido en el precepto legal señalado.



A.g. Folio de la solicitud 0001700347020

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Síntesis                 | Escrito de queja inmerso en el expediente DE-000184/2007 que se presentó ante el Órgano Interno de Control en el año 2007 |
| Sentido de la resolución | Confirma  |
| Rubro                    | Inexistencia  |

Contenido de la Solicitud:

"1.-Solicito una versión pública del expediente de **denuncia DE-000184/2007** que se presentó ante el **órgano interno de control** de la PGR el **05/06/2007**. Quiero señalar que solo requiero el **escrito de queja presentado en el mencionado expediente**. 2.-En una solicitud de información, la SFP informó que dicho archivo obraba en la FGR." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OIC**.

ACUERDO

CT/ACDO/0209/2020:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la declaratoria de **inexistencia** del expediente solicitado por el particular, en términos del **artículo 141** de la LFTAIP, en relación con el **criterio de interpretación 04/19** emitido por el Pleno del INAI, que a la letra señala:

**Propósito de la declaración formal de inexistencia.** El propósito de que los Comités de Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada, **es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés**; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal de inexistencia debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.



Aunado a que, de una búsqueda exhaustiva de la información públicamente disponible en el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se localizó diversa información relacionada con la baja definitiva de archivo vencido (procedimientos de responsabilidad administrativa, quejas y denuncias e inconformidades) de la entonces Procuraduría General de la República, correspondientes a los **1989, 1990, 1992 a 2010** en la cual se desprende que el 28 de junio de 2012, el entonces encargado del Archivo de Trámite del OIC en mención, ordenó la baja de la mencionada documentación, toda vez que ya se había cumplido los 2 años de guarda precautoria que dispone el Catálogo de Disposiciones Documentales de la SFP.

En consecuencia, en razón que no fue posible localizar documental o antecedente del documento al que se hace referencia en el requerimiento, este Órgano Colegiado consideró pertinente declarar la inexistencia de la información materia de la búsqueda dentro de los archivos de esta Fiscalía General de la República, de conformidad con lo establecido en el precepto legal señalado.





**A.10. Folio de la solicitud 0001700347110**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 |  |
| <b>Síntesis</b>                 | Escrito de queja inmerso en el expediente denuncia DE-000046/2008-ACR que se presentó ante el Órgano Interno de Control en el año 2008 |
| <b>Sentido de la resolución</b> | Confirma   |
| <b>Rubro</b>                    | Inexistencia   |

**Contenido de la Solicitud:**

"1.-Solicito una versión pública del expediente de **denuncia DE-000046/2008-ACR** que se presentó ante el **órgano interno de control** de la PGR **EL 25/09/2008**. Quiero señalar que **solo requiero el escrito de queja** presentado en el mencionado expediente. 2.-En una solicitud de información, la SFP informó que dicho expediente obraba en la FGR." (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

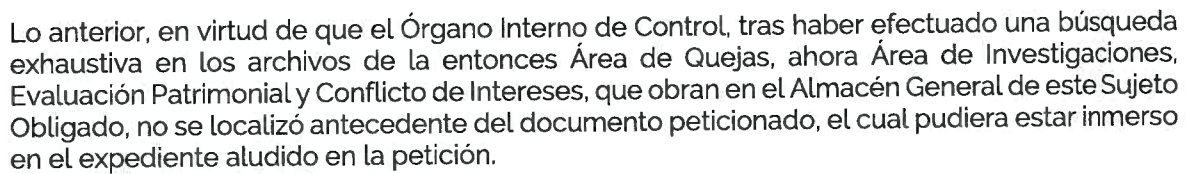
Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OIC**.

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0210/2020:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la declaratoria de **inexistencia** del expediente solicitado por el particular, en términos del **artículo 141** de la LFTAIP, en relación con el **criterio de interpretación 04/19** emitido por el Pleno del INAI, que a la letra señala:

**Propósito de la declaración formal de inexistencia.** El propósito de que los Comités de Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada, **es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés**; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal de inexistencia debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.



Aunado a que, de una búsqueda exhaustiva de la información públicamente disponible en el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se localizó diversa información relacionada con la baja definitiva de archivo vencido (procedimientos de responsabilidad administrativa, quejas y denuncias e inconformidades) de la entonces Procuraduría General de la República, correspondientes a los **1989, 1990, 1992 a 2010** en la cual se desprende que el 28 de junio de 2012, el entonces encargado del Archivo de Trámite del OIC en mención, ordenó la baja de la mencionada documentación, toda vez que ya se había cumplido los 2 años de guarda precautoria que dispone el Catálogo de Disposiciones Documentales de la SFP.

En consecuencia, en razón que no fue posible localizar documental o antecedente del documento al que se hace referencia en el requerimiento, este Órgano Colegiado consideró pertinente declarar la inexistencia de la información materia de la búsqueda dentro de los archivos de esta Fiscalía General de la República, de conformidad con lo establecido en el precepto legal señalado.



A.11. Folio de la solicitud 0001700347220

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Síntesis                 | Escrito de queja inmerso en el expediente denuncia 000002/2010 que se presentó ante el Órgano Interno de Control en el año 2010 |
| Sentido de la resolución | Confirma  |
| Rubro                    | Inexistencia  |

Contenido de la Solicitud:

"1.-Solicito una versión pública del **expediente de denuncia 000002/2010** que se presentó ante el **órgano interno de control** de la PGR el **11/01/2010**. Quiero señalar que solo requiero **el escrito de queja presentado en el mencionado expediente**. 2.-En una solicitud de información, la SFP informó que dicho expediente obraba en la FGR" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OIC**.

ACUERDO

CT/ACDO/0211/2020:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la declaratoria de **inexistencia** del expediente solicitado por el particular, en términos del **artículo 141** de la LFTAIP, en relación con el **criterio de interpretación 04/19** emitido por el Pleno del INAI, que a la letra señala:

**Propósito de la declaración formal de inexistencia.** El propósito de que los Comités de Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada, **es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés**; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal de inexistencia debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.



Aunado a que, de una búsqueda exhaustiva de la información públicamente disponible en el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se localizó diversa información relacionada con la baja definitiva de archivo vencido (procedimientos de responsabilidad administrativa, quejas y denuncias e inconformidades) de la entonces Procuraduría General de la República, correspondientes a los **1989, 1990, 1992 a 2010** en la cual se desprende que el 28 de junio de 2012, el entonces encargado del Archivo de Trámite del OIC en mención, ordenó la baja de la mencionada documentación, toda vez que ya se había cumplido los 2 años de guarda precautoria que dispone el Catálogo de Disposiciones Documentales de la SFP.

En consecuencia, en razón que no fue posible localizar documental o antecedente del documento al que se hace referencia en el requerimiento, este Órgano Colegiado consideró pertinente declarar la inexistencia de la información materia de la búsqueda dentro de los archivos de esta Fiscalía General de la República, de conformidad con lo establecido en el precepto legal señalado.

[illegible]





**A.12. Folio de la solicitud 0001700347320**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 |  |
| <b>Síntesis</b>                 | Escrito de queja inmerso en el expediente denuncia DE-000070/2009 que se presentó ante el Órgano Interno de Control en el año 2009 |
| <b>Sentido de la resolución</b> | Confirma   |
| <b>Rubro</b>                    | Inexistencia   |

**Contenido de la Solicitud:**

"1.-Solicito una versión pública del expediente de **denuncia DE-000070/2009** que se presentó ante el **órgano interno de control** de la PGR el **09/11/2009**. Quiero señalar que solo requiero el **escrito de queja presentado en el mencionado expediente**. 2.-En una solicitud de información, la SFP informó que dichos archivos obraban en la FGR." (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OIC**.

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0212/2020:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la declaratoria de **inexistencia** del expediente solicitado por el particular, en términos del **artículo 141** de la LFTAIP, en relación con el **criterio de interpretación 04/19** emitido por el Pleno del INAI, que a la letra señala:

**Propósito de la declaración formal de inexistencia.** El propósito de que los Comités de Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada, **es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés**; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal de inexistencia debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.



Aunado a que, de una búsqueda exhaustiva de la información públicamente disponible en el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se localizó diversa información relacionada con la baja definitiva de archivo vencido (procedimientos de responsabilidad administrativa, quejas y denuncias e inconformidades) de la entonces Procuraduría General de la República, correspondientes a los **1989, 1990, 1992 a 2010** en la cual se desprende que el 28 de junio de 2012, el entonces encargado del Archivo de Trámite del OIC en mención, ordenó la baja de la mencionada documentación, toda vez que ya se había cumplido los 2 años de guarda precautoria que dispone el Catálogo de Disposiciones Documentales de la SFP.

En consecuencia, en razón que no fue posible localizar documental o antecedente del documento al que se hace referencia en el requerimiento, este Órgano Colegiado consideró pertinente declarar la inexistencia de la información materia de la búsqueda dentro de los archivos de esta Fiscalía General de la República, de conformidad con lo establecido en el precepto legal señalado.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal dashed lines. Two blue arrows are present: one at the top right corner pointing downwards, and another near the bottom center pointing upwards. The paper appears to be part of a notebook or a template for writing.



A.13. Folio de la solicitud 0001700347420

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          |  |
| Síntesis                 | Escrito de queja inmerso en el expediente denuncia DE-000050/2011 que se presentó ante el Órgano Interno de Control en el año 2011 |
| Sentido de la resolución | Confirma   |
| Rubro                    | Inexistencia   |

**Contenido de la Solicitud:**

"1.-Solicito una versión pública del expediente de **denuncia DE-000050/2011** que se presentó ante el **órgano interno de control** de la PGR el **13/05/2011**. Quiero señalar que solo requiero el **escrito de queja presentado en el mencionado expediente**. 2.-En una solicitud de información, la SFP informo que dicho expediente obra en la FGR." (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OIC**.

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0213/2020:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la declaratoria de **inexistencia** del **"...escrito de queja..."** que pudo haber obrado en el expediente de queja DE-000050/2011 al que hace referencia en el particular, en términos del **artículo 141** de la LFTAIP, en relación con el **criterio de interpretación 04/19** emitido por el Pleno del INAI, que a la letra señala:

**Propósito de la declaración formal de inexistencia.** El propósito de que los Comités de Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada, **es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés**; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal de inexistencia debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.



Por ello, al no hallar el documento con las características aludidas en su solicitud, este Órgano Colegiado consideró pertinente declarar la inexistencia formal de la información materia de la búsqueda, dentro de los archivos de esta Fiscalía General de la República, de conformidad con lo establecido en el **artículo 141** de la LFTAIP.

[illegible]





A.14. Folio de la solicitud 0001700347920

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Síntesis                 | Copias certificadas por triplicado del Oficio No. PGR/225/2000 |
| Sentido de la resolución | Confirma   |
| Rubro                    | Inexistencia   |

**Contenido de la Solicitud:**

"Solicito de la manera más atenta, **copias certificadas por triplicado del Oficio No. PGR/225/2000** del la Oficina del Procurador enviado por el C. Procurador General de la República Lic. Jorge Madrazo Cuéllar de fecha Siete de Abril del año Dos Mil (7 de abril del 2000) dirigido al Senador Francisco J. Molina." (Sic)

**Otros datos para facilitar su localización:**

"Av. Insurgentes 20, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06700  
Me permito anexar copia simple escaneada en formato PDF del referido oficio." (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

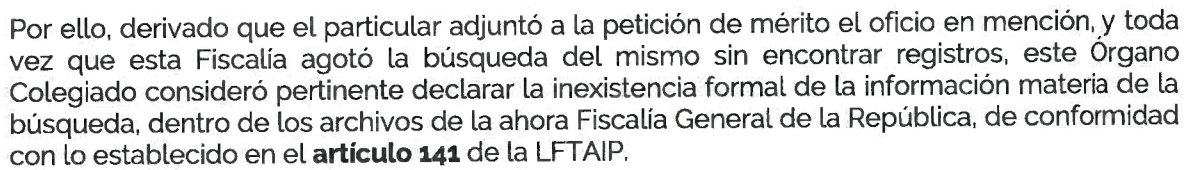
Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SCRPPA y Secretaría Técnica de la OF.**

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0214/2020:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la declaratoria de **inexistencia** del oficio PGR/225/2000 aparentemente signado en el año 2000, en términos del **artículo 141** de la LFTAIP, en relación con el **criterio de interpretación 04/19** emitido por el Pleno del INAI, que a la letra señala:

**Propósito de la declaración formal de inexistencia.** El propósito de que los Comités de Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada, **es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés;** por lo cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal de inexistencia debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.



37



**B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la clasificación de reserva y/o la confidencialidad de la información requerida:**

**B.1. Folio de la solicitud 0001700164520**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Síntesis</b>                 | Sobre probable personal sustantivo en la institución |
| <b>Sentido de la resolución</b> | Confirma   |
| <b>Rubro</b>                    | Información clasificada como reservada               |

**Contenido de la Solicitud:**

"Solicito copia de la **versión pública de los expedientes de investigación y las resoluciones de las sanciones en que aparecen implicados los exfuncionarios y funcionarios de esta Fiscalía en la delegación de Quintana Roo Javier Ocampo García, Bertha Cordero Reyes, Enrique Pérez García César Eduardo Cervantes Saavedra**. Favor de informar la fecha en que se dieron de baja cada uno de los funcionarios y el motivo de la baja. En caso de que no se pueda proporcionar la versión pública solicitada, favor de indicar 1. **Número de expediente de la investigación y, en su caso, carpeta de investigación**. 2. **La fecha** en que se inició la investigación 3. **Presuntas irregularidades y/o delitos** por las que se inició la investigación. 4. **El estado** en que se encuentra la investigación. 5. **Las sanciones** que se han aplicado a los sujetos referidos." (Sic)

**Respuesta a solicitud de información adicional:**

"Solicito se me **informe si Javier Ocampo García, Bertha Cordero Reyes, Enrique Pérez García y César Eduardo Cervantes Saavedra siguen laborando en la Fiscalía General**. De ser así, favor de informar la dirección a la que están adscritos y la fecha en que se incorporaron a la FGR. En caso de que ya no estén laborando en la FGR, pido se me informe la fecha en que causaron baja, y el motivo por el que dejaron de trabajar en la FGR.

Asimismo, requiero se me informe si la FGR ha iniciado algún procedimiento sancionatorio en contra de dichos funcionarios, así como el detalle de las sanciones aplicadas a cada funcionario, la fecha y el motivo que originó cada sanción. Favor de proporcionar copia de toda la información que obre en su poder relativa a las posibles sanciones aplicadas contra los funcionarios enlistados." (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **CPA**.





**ACUERDO**

**CT/ACDO/0215/2020:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar que las personas citadas en la petición hayan formado parte del personal adscrito a la institución, de conformidad con lo previsto en el **artículo 110, fracción V** de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años, o bien, cuando las causas que dieron origen a la clasificación subsistan.

En ese tenor, resulta conveniente mencionar el contenido del citado precepto legal, que en su parte conducente refiere:

**De la Información Reservada**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...  
**V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;**

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Vigésimo tercero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

**Vigésimo tercero.** Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, **será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.**

Por lo que, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, el cual prevé que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño:

**Artículo 110, fracción V:**

- I. Divulgar información relacionada con probable personal sustantivo de la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, representaría un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permitiría identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.





- II. Derivado de que las actuaciones de la Fiscalía tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que permitirían localizar a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas, en razón que se podría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de la indagatoria, atentarían en contra de ellos.
- III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información relativa a datos de personal sustantivo de esta Institución, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.



**B.2. Folio de la solicitud 0001700322520**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Síntesis</b>                 | Resultados de evaluaciones de desempeño de una servidora pública |
| <b>Sentido de la resolución</b> | Confirma   |
| <b>Rubro</b>                    | Información clasificada como reservada y confidencial            |

**Contenido de la Solicitud:**

"Que **facultades** tiene la C. **Norma González Rodríguez** adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales para realizar cambios en las plazas y bajas definitas sin justificación alguna y poder privilegiar a personal conocido por hacer lo que ella les pide y amenazar al demás personal de no quejarse si no los corren. De que privilegios goza para poder tener un horario distinto al demás personal. **Resultados de sus evaluaciones de Desempeño para ver si esta capacitada para poder ocupar su cargo y si no cuenta con problemas mentales, psicológicos** o de alguna enfermedad de estrés toda vez que se la pasa gritando y amenazando al personal y si el Director General tiene conocimiento de todo lo que pasa en su área." (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **CPA**.

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0216/2020:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva y confidencial respecto del extracto del requerimiento consistente en:

*"...Resultados de sus evaluaciones de Desempeño para ver si esta capacitada para poder ocupar su cargo y si no cuenta con problemas mentales, psicológicos..."*

Toda vez que, dicha información recae en los supuestos de clasificación previstos en el **artículo 110, fracción XIII** (hasta por un periodo de cinco años, o bien, cuando las causas que dieron origen a su clasificación subsistan) y **artículo 113, fracción I** de la Ley de la materia.



De lo anterior, resulta conveniente mencionar el contenido del citado precepto legal, que en su parte conducente refiere:

**De la Información Reservada**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

**XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y esta Ley y no las contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.**

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Trigésimo segundo** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

**Trigésimo segundo.** De conformidad con el artículo 113, **fracción XIII** de la Ley General, **podrá considerarse como información reservada, aquella que por disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacional del que el Estado mexicano sea parte**, le otorgue tal carácter siempre que no se contravenga lo establecido en la Ley General.

Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberán fundar y motivar la clasificación de la información, señalando de manera específica el supuesto normativo que expresamente le otorga ese carácter.

Por lo que, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, el cual prevé que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño:

- I. **Riesgo real, demostrable e identificable.** El proporcionar la información solicitada representaría contravenir lo indicado en la *Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública*, entendiéndose esto como el expediente de cada individuo que es o sea sometido a dichos exámenes de desempeño para el ejercicio de sus funciones, expedientes que, deberán permanecer en reserva, toda vez que al observarse la divulgación de los mismos solo traería a colación la exposición de la intimidad de las personas, sujetas a dichas evaluaciones.
- II. **Perjuicio que supera el interés público:** Es pertinente señalar que la reserva de la información por parte de esta institución, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que la solicitud en comento atiende a disposiciones expresas de las Leyes con las cuales se basó esta Institución para la aplicación de las evaluaciones materia de la solicitud, leyes que disponen que es considerada información reservada aquella en la que este contenido el o los resultados del proceso de evaluación de control de confianza con la excepción de que deban ser presentados en procedimientos administrativos o judiciales, situación que no es el caso que nos atañe.





- III. Principio de proporcionalidad. El reservar lo requerido no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información en virtud de que dicha reserva resulta proporcional al atender al resguardo de la información, que puede ser cualquier documento o el mismo expediente que contenga los datos personales o confidenciales de conformidad con la reserva de la información mencionada, robustece lo anterior, lo citado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, toda vez que los procesos de evaluación guardan el carácter de reservado.

También, como se señaló con antelación, dicha información tiene el carácter de confidencial, toda vez que proporcionar dicho dato vulneraría la privacidad; es decir, la esfera más íntima de una persona física identificada e identificable, por tanto su protección no estará sujeta a temporalidad alguna y a ésta información, solo podrá tener acceso el titular de la información o sus representantes legales, o en caso, los servidores públicos facultados para ello, de conformidad con lo establecido en la **fracción I del artículo 113** de la LFTAIP, mismo que se transcribe a continuación:

**ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:**

- I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;**

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Refuerza lo anterior, lo que se indica en los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, en su numeral **Trigésimo Octavo** que establecen lo siguiente:

**CAPÍTULO VI**

**DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL**

**Trigésimo octavo.** Se considera información confidencial:

- I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;**

**II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información,** de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y

...

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga **datos personales** de una **persona física**, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

De igual forma, en el ejercicio de acceso a la información, los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión, y que, en relación con ellos, deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido por la **fracción VI, artículo 68** de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, la cual es del tenor literal siguiente:





**Artículo 68.** Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán:

VI. Adoptar Las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Los sujetos obligados **no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones**, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de Los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley.

En términos de lo expuesto, es dable concluir que la protección de la confidencialidad de los datos personales es una garantía de la que goza cualquier persona, y esta Institución no puede difundir, distribuir o comercializar, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo con la normatividad aplicable.

Por lo antes señalado, resulta aplicable la siguiente Tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala:

**INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).**

Las **fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, establecen que **el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales**. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: **el de información confidencial** y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a **la vida privada y los datos personales**, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de **información confidencial**, el cual **restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización**. Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del **artículo 16 constitucional**, el cual **reconoce que el derecho a la protección de datos personales** -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, **existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales**. Por lo anterior, el acceso público -para todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, **la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales**. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información. Época: Décima Época. Registro: 2000233. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. VII/2012 (10a.) Página: 655.



En esa tesitura, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.



B.3. Folio de la solicitud 0001700330120

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Síntesis                 | Probables investigaciones en contra de servidores o exservidores públicos |
| Sentido de la resolución | Confirma  |
| Rubro                    | Información clasificada como reservada                                    |

**Contenido de la Solicitud:**

*"Saber si la auditoría superior de la federación ha denunciado penalmente a funcionarios del municipio de san pedro, en el estado de coahuila de zaragoza. de 2005 a la fecha. en específico al tesorero de nombre rodolfo lopez."* (Sic)

**Respuesta a solicitud de información adicional:**

*"el nombre completo de la persona que fungió como tesorero municipal es rodolfo lopez muñiz."* (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SCRPPA, FECC y SEIDF.**

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0217/2020:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la confidencialidad del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna indagatoria en contra del servidor público citado en la petición; lo anterior, con fundamento en el **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP.

Exceptuando de lo anterior, únicamente aquellos registros que actualicen las hipótesis emitidas en los criterios resueltos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI), los cuales medularmente consisten en lo siguiente:





- ♦ Indagatorias en general localizadas en contra del servidor público de alto rango, electo democráticamente, por conductas cometidas en ejercicio de sus funciones, cuando de las mismas se deriven sentencias absolutorias o condenatorias firme, es decir, que no sea procedente su impugnación por medio legal alguno, y
- ♦ Las denuncias en general localizadas, respecto de las cuales ya se haya notificado al imputado los hechos que se investigan por delitos cometidos por éste en el ejercicio del encargo (conforme al Título Décimo del Código Penal Federal), que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: en trámite; reserva; consignadas en proceso penal pendientes de resolver; concluidas, por el no ejercicio de la acción penal o terminadas por la aplicación de un medio alternativo de controversia.

Toda vez que, emitir pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación relacionada con la persona aludida en la petición, se encontraría directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP, que a la letra establece:

TÍTULO CUARTO  
INFORMACIÓN CLASIFICADA  
CAPÍTULO III  
*De la Información Confidencial*

**ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:**

I. **La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;**

La información confidencial **no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.**

Aunado a lo anterior, se precisa que en los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas*, se dispone lo siguiente:

**TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:**





- I. **Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y
- III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Fiscalía, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso a materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia irrevocable, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

CAPÍTULO II  
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

**ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad**

*En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.*

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

*Tesis: I.30.C. J/71 (9a.)  
Décima Época  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tribunales Colegiados de Circuito  
160425 1 de 3  
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036*



**DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.**

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.3o.C.244 C

Página: 1309

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES.** El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.





*Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.*

*De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.*

*Tesis Aislada*

*Novena Época*

*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

*Pleno*

*Tomo: XI, Abril de 2000*

*Tesis: P. LX/2000*

*Página: 74*

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.**

*El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.*

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la **presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, que a la letra dispone:

**ARTÍCULO 20.** *El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.*

**B. De los derechos de toda persona imputada:**

**I.** *A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.*

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del **Código Nacional de Procedimientos Penales**, que a la letra establece:

**ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia**

Décima Sesión Ordinaria



De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.

[illegible]





**B.4. Folio de la solicitud 0001700336820**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Síntesis</b>                 | Sobre incautación de químicos durante un operativo en el municipio de García, Nuevo León en junio de 2019 |
| <b>Sentido de la resolución</b> | Confirma  |
| <b>Rubro</b>                    | Información clasificada como reservada  |

**Contenido de la Solicitud:**

"Solicito una lista de todos los **químicos** por nombre **que incautaron durante un operativo en en el municipio de García, Nuevo León, el 15 o 16 de Junio 2019** (<https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-294-19-fgr-asegura-en-nuevo-leon-laboratorio-posiblemente-utilizado-para-elaborar-fentanilo-204926>) donde localizaron un área de laboratorio con instrumentos, maquinaria y sustancias químicas.

**Solicito todos los datos sobre un hombre detenido en ese operativo. Se llama José Guadalupe Almaquer Herrera. Quiero saber dónde esta detenido y cómo puedo ubicarlo.**

Esta solicitud se realiza en virtud del texto vigente de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el pasado 9 de mayo de 2016, cuyo Capítulo 1, Artículo 2, fracciones I, II y III, señalan que se debe I Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos; II. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral; y III. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados Así como el Artículo 3, Capítulo 1, el cual prevé que Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y esta Ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes señalan. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información." (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SCRPPA**.

**ACUERDO  
CT/ACDO/0218/2020:**



### **Determinación I:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva de las expresiones documentales que darían cuenta de lo solicitado, toda vez que las mismas se encuentran en un expediente de investigación en trámite ante el Ministerio Público de la Federación de la **SCRPPA**, por lo que actualiza la clasificación prevista en el **artículo 110, fracción XII** de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años, o bien, hasta que las causas que dieron origen a su clasificación subsistan.

Por tanto, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:

#### **De la Información Reservada**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, **como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:**

**XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y**

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Trigésima Primero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

**Trigésimo primero.** De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, **podrá considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación**, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, **el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.**

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño.

- I. Es un riesgo real, toda vez que otorgar expedientes de investigación en trámite menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones en contra de miembros de la delincuencia, así como disminuir la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito. y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano Jurisdiccional competente la imputación correspondiente; un riesgo es demostrable, ya





que al otorgar la información de su interés se expondría la eficacia de esta Procuraduría General de la República, en virtud que al entregar el documento podrían alterarse los medios de prueba recopilados para sustentar la mencionada formulación de la imputación respectiva; y un riesgo identificable derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con una averiguación previa en trámite que al ser difundida deja expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones que repercutirían en la vinculación a proceso y por ende la acusación contra el imputado y la reparación del daño.

- II. Es pertinente señalar que dicha reserva supera el ejercicio de los particulares del derecho de acceso a la información, toda vez que la citada clasificación atiende a la protección de un interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que la atribución de investigación y persecución de un hecho posiblemente constitutivo de delito se traduce en un medio que permite dar cuenta de sus actividades mediante misión de cumplir de manera irrestricta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos.
- III. La restricción de proporcionar la información inmersa en la averiguación previa de los hechos relacionados con la documentación que atiende su solicitud, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la protección del expediente de indagatoria en trámite que de acuerdo a las facultades con las que cuenta esta Fiscalía General de la República, consistentes en la investigación y persecución de delitos permite llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas, y allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, a efecto de que el Órgano Jurisdiccional competente resuelva la probable responsabilidad y por ende la acusación del imputado vinculado con la averiguación previa correspondiente.

#### **Determinación II:**

Por otro lado, a fin de desvincular a la persona aludida en la petición con los hechos que se citan en la misma, este Órgano Colegiado por unanimidad **confirma** la confidencialidad del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna indagatoria en contra de la persona referida en la solicitud; lo anterior, con fundamento en el **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP.

Toda vez que, emitir pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación relacionada con la persona referida en la petición, se encontraría directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que



actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP, que a la letra establece:

TÍTULO CUARTO  
INFORMACIÓN CLASIFICADA  
CAPÍTULO III  
*De la Información Confidencial*

**ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:**

I. *La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;*

“  
La información confidencial **no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma**, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información*, así como la elaboración de versiones públicas, se dispone lo siguiente:

**TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:**

- I. **Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;
- II. *La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,*  
y
- III. *Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.*

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Fiscalía, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso a materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia irrevocable, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

CAPÍTULO II  
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO





**ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad**

*En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.*

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

*Tesis: I.3o.C. J/71 (ga.)*

*Décima Época*

*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

*Tribunales Colegiados de Circuito*

*160425 1 de 3*

*Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036*

**DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.**

*El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.*

*Tesis Aislada*

*Novena Época*

*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

*Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.*

*Tomo: XIV, Septiembre de 2001*



Tesis: I.30.C.244 C

Página: 1309

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES.** El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LX/2000

Página: 74

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.** El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen



*el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.*

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la **presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, que a la letra dispone:

*ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.*

*B. De los derechos de toda persona imputada:*

*I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.*

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del **Código Nacional de Procedimientos Penales**, que a la letra establece:

**ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia**

*Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código.*

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito





**B.5. Folio de la solicitud 0001700341320**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Síntesis</b>                 | Nombre de servidor público que realiza o realizó actividades sustantivas |
| <b>Sentido de la resolución</b> | Confirma   |
| <b>Rubro</b>                    | Información clasificada como reservada                                   |

**Contenido de la Solicitud:**

*"Solicito conocer los **nombres de los titulares y encargados de despacho de la Delegación Guanajuato de la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República entre enero 2010 y febrero de 2020.***

*Requiero que se indique el **período en el que cada uno de ellos ocupó dicho cargo, así como si se trata de delegado o encargado de despacho.**" (Sic)*

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDF.**

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0219/2020:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva del **nombre** del agente del Ministerio Público de la Federación que fungió como Encargado de Despacho, durante el periodo de **01 al 15 de septiembre de 2009** en la Delegación Estatal Guanajuato, de conformidad con el **artículo 110, fracción V** de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años, o bien, cuando las causas que dieron origen a la clasificación subsistan.

En ese tenor, resulta conveniente mencionar el contenido del citado precepto legal, que en su parte conducente refiere:

**De la Información Reservada**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

**V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;**





Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Vigésimo tercero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

**Vigésimo tercero.** Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, **será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.**

Por lo que, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, el cual prevé que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño:

**Artículo 110, fracción V:**

- I. Divulgar información perteneciente a personal sustantivo de la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, tal y como lo es el **nombre** representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permite identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.
- II. Derivado de que las actuaciones de la Fiscalía tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que permitirían localizar a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas, en razón que se podría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de la indagatoria, atentarían en contra de ellos.
- III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información relativa a datos de personal sustantivo de esta Institución, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales. -----



**B.6. Folio de la solicitud 0001700344320**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Síntesis</b>                 | Probables investigaciones en contra de terceras personas |
| <b>Sentido de la resolución</b> | Confirma   |
| <b>Rubro</b>                    | Información clasificada como reservada                   |

**Contenido de la Solicitud:**

*"Se solicita atentamente **indicar si conforme a sus archivos existe indicios o una solicitud formal de extradición del señor Rafael Antonio Olvera Amezcua**, así como juicios en contra de él. Esto conforme a la siguiente noticia <https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Giran-nueva-orden-de-aprehension-contra-dueno-de-Ficrea-20200217-0099.html>" (Sic)*

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **CAIA**.

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0220/2020:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** únicamente la clasificación del pronunciamiento respecto de afirmar o negar la existencia o inexistencia de una solicitud de inicio de proceso de extradición en contra de la persona de referencia, con fundamento en el **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP

Toda vez que, emitir pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación de la cual se derive un proceso de extradición relacionada con la persona aludida en la petición, se encontraría directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP, que a la letra establece:



TÍTULO CUARTO  
INFORMACIÓN CLASIFICADA  
CAPÍTULO III  
De la Información Confidencial

**ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:**

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

La información confidencial **no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma**, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas*, se dispone lo siguiente:

**TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:**

I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;

II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y

III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Fiscalía, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso a materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia irrevocable, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

CAPÍTULO II  
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

**ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad**





*En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.*

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

*Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)*

*Décima Época*

*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

*Tribunales Colegiados de Circuito*

*160425 1 de 3*

*Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036*

**DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.**

*El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.*

*Tesis Aislada*

*Novena Época*

*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

*Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.*

*Tomo: XIV, Septiembre de 2001*

*Tesis: I.3o.C.244 C*





Página: 1309

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES.** El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LX/2000

Página: 74

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.** El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar



*daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.*

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la **presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, que a la letra dispone:

*ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.*

*B. De los derechos de toda persona imputada:*

*I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.*

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del **Código Nacional de Procedimientos Penales**, que a la letra establece:

**ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia**

*Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código.*

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.



**B.7. Folio de la solicitud 0001700344720**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Síntesis</b>                 | Bitácoras de vuelo                          |
| <b>Sentido de la resolución</b> | Confirma                                    |
| <b>Rubro</b>                    | Clasificación de información como reservada |

**Contenido de la Solicitud:**

"A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AÉREOS. **BITACORA DE VUELOS DE LA NAVE DE ALA ROTATIVA ECH-145, MATRICULA XC-LNZ; DESDE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 HASTA 15 DE FEBRERO 2020, PROPÓSITO DE CADA UNA DE LAS OPERACIONES Y OCUPANTES EN CADA OPERACIÓN.**" (Sic)

**Otros datos para facilitar su localización:**

"DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AÉREOS" (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **CPA.**

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0221/2019:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva de la bitácora de vuelo requerida por el particular, con fundamento en el artículo **110, fracciones I, V y VII** de la LFTAIP, hasta por un periodo de 5 años, o bien, cuando las causas que dieron origen a su clasificación subsistan.

Por ello, se trae a colación el referido precepto legal:

**De la Información Reservada**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, **como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:**

**I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;**

...





V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Décimo Séptimo, Décimo octavo, Vigésimo tercero y Vigésimo sexto de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señala:

**Décimo séptimo.** De conformidad con el artículo 113, **fracción I** de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencialice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional cuando:

IV. **Se obstaculicen o bloqueen las actividades** de inteligencia o contrainteligencia y **cuando se revelen** normas, procedimientos, **métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo** que sean útiles para la generación de inteligencia **para la seguridad** nacional;

VI. **Se ponga en peligro la coordinación interinstitucional en materia de seguridad nacional;**

VII. **Se puedan menoscabar, obstaculizar o dificultar las estrategias o acciones para combatir la delincuencia organizada**, la comisión de los delitos contra la seguridad de la nación, entendiéndose estos últimos como traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración, el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;

VIII. **Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura** de carácter estratégico o prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura **que represente tal importancia para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;**

Asimismo, podrá considerarse como reservada **aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción** de las instituciones encargadas de la seguridad nacional; sus normas, procedimientos, métodos, fuentes, **especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles** a la generación de inteligencia para la Seguridad Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignan.

**Décimo octavo.** De conformidad con el artículo 113, **fracción I** de la Ley General, podrá considerarse como información **reservada, aquella que comprometa la seguridad pública**, al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público.

Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información **pueda entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública**, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales.

Asimismo, podrá considerarse como reservada **aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública**, sus planes, estrategias, **tecnología, información, sistemas de comunicaciones**.





**Vigésimo tercero.** Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar **un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.**

...

**Vigésimo sexto.** De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos.

Para que se verifique el supuesto de reserva, **cuando se cause un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos:**

- I. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;**
- II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y**
- III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.**

Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, como el que nos ocupa, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se emiten las siguientes pruebas de daño.

#### **Artículo 110, fracción I:**

- I. Riesgo real, demostrable e identificable:** Difundir la información solicitada y contenida en las bitácoras de vuelo comprometería la seguridad pública, pues implicaría la revelación del estado de fuerza de la institución y en particular de los vuelos que efectuaron las aeronaves mencionadas anteriormente. De igual manera vulneraría la capacidad de despliegue futura pues propiciaría que miembros de la delincuencia organizada conozcan datos que les permitan obstruir o evadir las técnicas y estrategias implementadas para la ejecución de operaciones.
- II. Perjuicio que supera el interés público:** El riesgo de perjuicio que supone la publicidad de la información solicitada, superaría el interés público de que se difunda, toda vez que se pondría en riesgo el estado de fuerza de la Fiscalía General de la República, ya que se podría conocer la capacidad de reacción con la que se cuenta. se podrían evadir las técnicas y estrategias de investigación y persecución de los delitos: por lo anterior, resulta de mayor importancia para la sociedad, el que se garantice el derecho a la seguridad pública, sobre el interés particular de conocer información que revelaría recursos empleados en la ejecución de las operaciones aéreas.



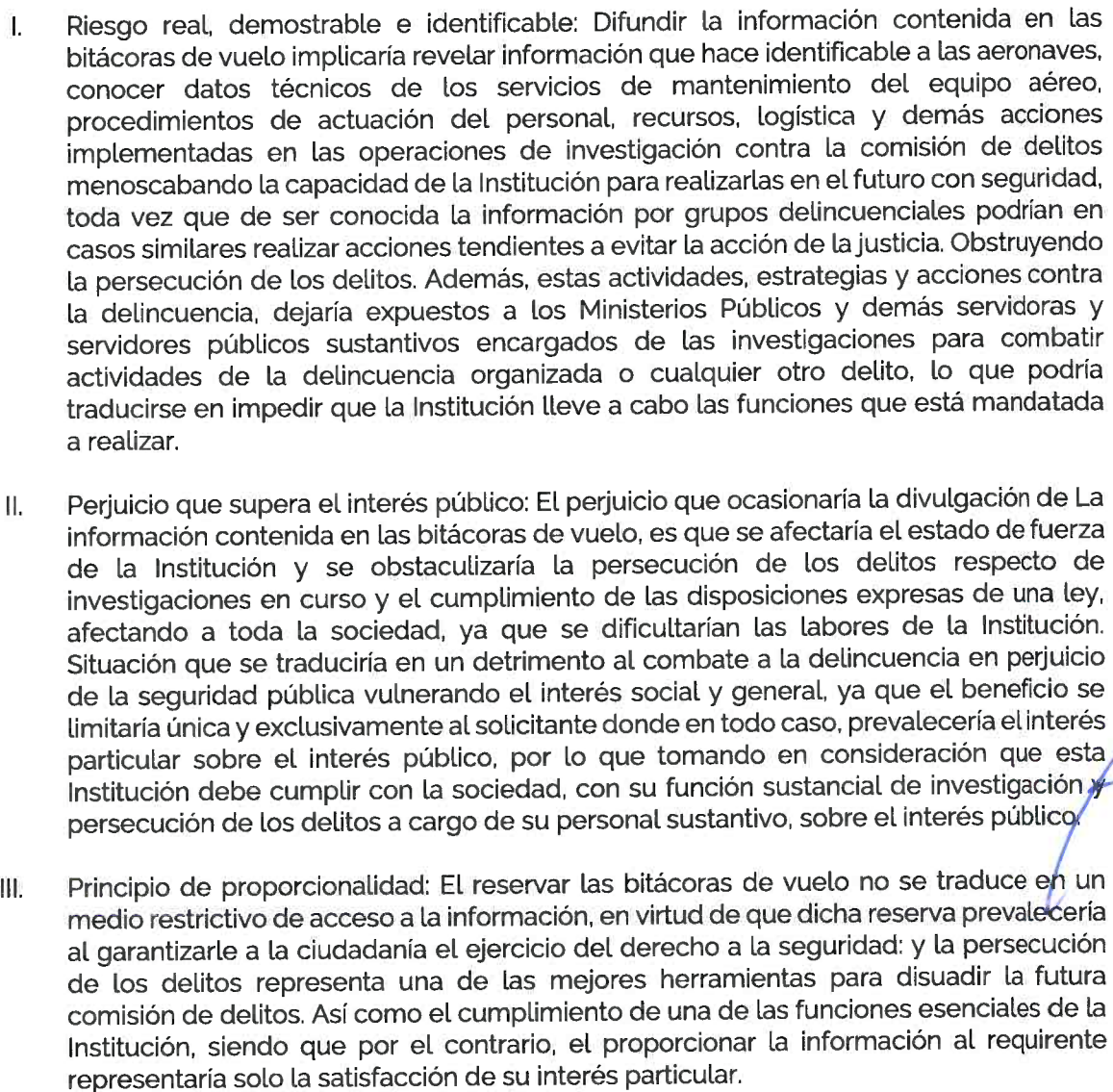
- III. Principio de proporcionalidad: El reservar las bitácoras de vuelo no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud de que dicha reserva prevalece al garantizar que se evite un perjuicio a las actividades de investigación y persecución de los delitos a través de la protección de la información relacionada con el estado de fuerza de la Fiscalía General de la República, y así pueda cumplir con sus atribuciones para la procuración de una justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de diversas Leyes y Tratados Internacionales.

**Artículo 110, fracción V:**

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: Difundir la información contenida en las bitácoras de vuelo y la relativa al personal sustantivo que se desempeña como tripulación, así como aquellos a quienes se presta el servicio como pasajeros los haría identificables y pondría en riesgo su vida, las funciones y actuaciones de seguridad que realizan y la de sus familiares por estar vinculados con los servidores públicos tomados en consideración para las actividades de investigación y acreditación del cuerpo del delito de diversos delitos del orden federal, así como el cumplimiento de ejecución de mandamientos de órdenes de detención, extradición y traslados entre otras.
- II. Perjuicio que supera el interés público: Al permitir que se identifique al personal sustantivo se pondría en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad física, aunado a que el hecho de que personas con pretensiones delictivas pudieran promover algún vínculo o relación directa con dichos servidores públicos o la realización en el futuro de diversas acciones dirigidas a la evasión de órdenes de detención, extradición y traslados, como emboscadas e infiltraciones en operaciones similares. Situaciones que se traducirían en un detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública vulnerando el interés social y general, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente al solicitante en donde en todo caso, prevalecería el interés particular sobre el interés público, por lo que tomando en consideración que esta Institución debe cumplir con la sociedad, con su función sustancial de investigación y persecución de los delitos a cargo de su personal sustantivo, no debe prevalecer el interés público.
- III. Principio de proporcionalidad: El reservar información no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud de que dicha reserva prevalece al proteger el más importante de los derechos como es la vida, la salud y la seguridad de las servidoras o los servidores públicos y sus familias, mismos que hacen posible una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de diversas Leyes y Tratados Internacionales.

**Artículo 110, fracción VII:**









**B.8. Folio de la solicitud 0001700348020**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Síntesis</b>                 | Programa Nacional de Exhumaciones, Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense y Programa Nacional de Búsqueda y Localización y documentos que delineen la estrategia para la realización de exhumaciones, búsqueda y localización de personas desaparecidas |
| <b>Sentido de la resolución</b> | Confirma  |
| <b>Rubro</b>                    | Clasificación de información como reservada   |

**Contenido de la Solicitud:**

*"Solicito copia del **Programa Nacional de Exhumaciones, o Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.***

***Si no existe este documento, entonces el plan rector, programa, estrategia, o cualquier documento que delinea la estrategia para la realización de exhumaciones***

*Solicito copia del **Programa Nacional de Búsqueda y Localización.***

***Si no existe este documento, entonces el plan rector, programa, estrategia, o cualquier documento que delinea la estrategia para la búsqueda y localización de personas desaparecidas." (Sic)***

**Otros datos para facilitar su localización:**

*"Son documentos mencionados en el **PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA (LGMDFP)***

*[https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/02/SEGOB\\_Plan-Busqueda.pdf](https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/02/SEGOB_Plan-Busqueda.pdf)" (Sic)*

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FEMDH.**

**ACUERDO  
CT/ACDO/0222/2019:**



### **Determinación I:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad determina **confirmar** la declaratoria de inexistencia del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, de conformidad en relación con el artículo 141 de la LFTAIP, en concatenación con el criterio de interpretación 20/13 del INAI, que a la letra establece:

**Procede declarar la inexistencia cuando la información solicitada sea el resultado de un proceso deliberativo en trámite.** De acuerdo con el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta causal de clasificación tiene por objeto proteger la información que sirve de base para deliberar sobre un asunto determinado, a fin de evitar que su publicidad afecte el proceso deliberativo. Ahora bien, la inexistencia implica necesariamente que la información no se encuentra en los archivos de la dependencia o entidad aun cuando tenga facultades para contar con ella. En este sentido, **en los casos en que se esté llevando a cabo un proceso deliberativo del cual aún no se emite una determinación definitiva y lo solicitado por el particular consista precisamente en esa determinación, procede que el Comité de Información declare formalmente su inexistencia.**

Lo anterior, en virtud de que si bien, la **FEMDH** manifestó que de conformidad con el artículo 44 de la *Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas*, presidido por la Secretaría de Gobernación y fungiendo como Secretaría Ejecutiva la Comisión Nacional de Búsqueda, está integrado, entre otros, por esta Fiscalía General de la República.

Por ello, el Sistema cuenta para su funcionamiento con diferentes herramientas y atribuciones para el cumplimiento de su objetivo. En ese tenor y en términos del artículo 135 de la mencionada Ley se refiere al Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, instrumento a cargo de la FGR, que deberá contener como mínimo, entre otros, un diagnóstico, como línea base e información metodológica sobre la elaboración del programa.

En consecuencia, derivado de los trabajos y coordinación interinstitucional entre los integrantes del sistema, la **FEMDH** inició con la elaboración del "Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense", el cual continua en proceso deliberativo, por lo que hasta en tanto no sea adoptaba una decisión definitiva, la cual deberá estar documentada, existe una imposibilidad jurídica para entregar lo que a la fecha se encuentra documentado, siendo que su divulgación podría entorpecer la terminación y posterior eficacia del análisis que aún se realiza y sistematiza.

### **Determinación II:**

Ahora bien, en seguimiento a los siguientes extractos del requerimiento dentro de los cuales se advierte que son los insumos para obtener la versión definitiva de los protocolos señalados con antelación:



**"... plan rector, programa, estrategia, o cualquier documento que delinea la estrategia para la realización de exhumaciones..."**

Este Órgano Colegiado ha determinado **confirmar** la clasificación de reserva de la documentación descrita, en términos de lo previsto en el **artículo 110, fracción VIII** de la LFTAIP, **por un periodo de 2 años**, de conformidad con la resolución RRA 14823/19 y su acumulado RRA 14870/19.

Por ello, se trae a colación el referido precepto legal:

**De la Información Reservada**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, **como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:**

**"VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;**

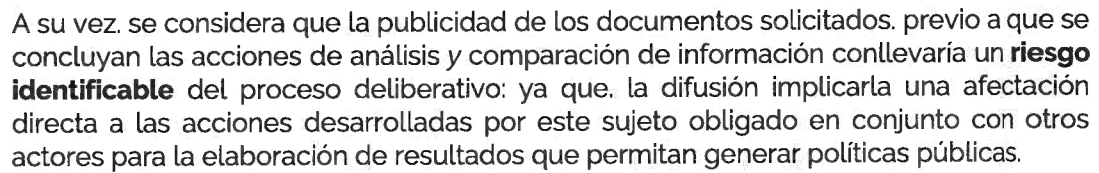
Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Vigésimo Séptimo de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señala:

**Vigésimo séptimo.** De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, **aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada.** Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente:

Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, como el que nos ocupa, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se emiten las siguientes pruebas de daño.

- I. La divulgación de los documentos requeridos, previo a que se concluya la elaboración del diagnóstico conllevaría un **riesgo real** en la dinámica del proceso deliberativo; ya que implicaría la publicidad de aquellos documentos que serán sometidos a análisis. a efecto de generar políticas públicas en torno a la temática sobre la situación en que se encuentran los Servicios Médicos Forenses y Servicios Periciales del país relativos a la desaparición forzada, aspecto que, a su vez, conllevaría un **riesgo demostrable** en la dinámica del proceso deliberativo, ya que la difusión implicaría la generación de un factor adicional. que incide en la elaboración del propio diagnóstico y del **Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, (PNEIF)**; con lo cual, no se estarían garantizando las mejores condiciones para mejorar los servicios periciales y forenses en el Estado Mexicano; lo anterior, dado que **aún no se ha concluido con el análisis de las opiniones e información obtenidas derivado de la primera etapa del proceso.**





- II. En esa tesitura, el **riesgo de perjuicio** que supondría la divulgación **supera el interés público** general de que se difunda, toda vez que la información requerida, es parte de las herramientas a las que se hace referencia y las mismas se encuentran en distintas fases de elaboración, lo que implica la posibilidad de complementación, modificación o eliminación de aspectos o precisiones que al efecto pudieran ser procedentes, para mayor garantía de su eficiencia.

Por tanto, su difusión podría interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño de las herramientas en cuestión, situación que puede influir en la implementación de las acciones de política pública a desarrollar para el debido cumplimiento, en específico en cuanto a la identificación forense de personas que aún son buscadas por sus familiares.

- III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y, además, representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que se evitaría que se presentaran injerencias externas que pudieran poner en riesgo el proceso de generación del diagnóstico y de Programa en la cuestión, pues aún no se encuentra concluida.



**B.9. Folio de la solicitud 0001700348620**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Síntesis</b>                 | Probables investigaciones en contra de servidores o exservidores públicos |
| <b>Sentido de la resolución</b> | Confirma  |
| <b>Rubro</b>                    | Información clasificada como reservada                                    |

**Contenido de la Solicitud:**

*"Pido conocer si en la Fiscalía General de la República en cualesquiera de las delegaciones y fiscalías especializadas existe iniciada alguna carpeta de investigación en la que el indiciado sea Luis Alberto Villarreal García, quien es servidor público actualmente presidente municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato. En su caso, pido conocer la versión pública de las actuaciones en la o las carpeta de investigación. El periodo de búsqueda lo preciso del día 1 de enero de 2014 al 1 de enero de 2020" (Sic)*

**Otros datos para facilitar su localización:**

*"Una de las carpetas sería la que tiene el número 1193/19 y estaría en la delegación Guanajuato." (Sic)*

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDO, FEMDH, CAIA, UEAF, FEDE, FECC, SCRPPA y SEIDF.**

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0223/2020:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la confidencialidad del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna indagatoria en contra del servidor público citado en la petición; lo anterior, con fundamento en el **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP.

Exceptuando de lo anterior, únicamente aquellos registros que actualicen las hipótesis emitidas en los criterios resueltos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI), los cuales medularmente consisten en lo siguiente:



- ♦ Indagatorias en general localizadas en contra del servidor público de alto rango, electo democráticamente, por conductas cometidas en ejercicio de sus funciones, cuando de las mismas se deriven sentencias absolutorias o condenatorias firme, es decir, que no sea procedente su impugnación por medio legal alguno, y
- ♦ Las denuncias en general localizadas, respecto de las cuales ya se haya notificado al imputado los hechos que se investigan por delitos cometidos por éste en el ejercicio del encargo (conforme al Título Décimo del Código Penal Federal), que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: en trámite; reserva; consignadas en proceso penal pendientes de resolver; concluidas, por el no ejercicio de la acción penal o terminadas por la aplicación de un medio alternativo de controversia.

Toda vez que, emitir pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación relacionada con la persona aludida en la petición, se encontraría directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP, que a la letra establece:

TÍTULO CUARTO  
INFORMACIÓN CLASIFICADA  
CAPÍTULO III  
*De la Información Confidencial*

**ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:**

I. La **que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;**

...  
La información confidencial **no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma**, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas*, se dispone lo siguiente:

**TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:**





- I. **Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y
- III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Fiscalía, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso a materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia irrevocable, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

## CAPÍTULO II DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

### **ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad**

*En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.*

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

*Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)*

*Décima Época*

*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

*Tribunales Colegiados de Circuito*

*160425 1 de 3*

*Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036*



**DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.**

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.3o.C.244 C

Página: 1309

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES.** El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.





*Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.*

*De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.*

*Tesis Aislada*

*Novena Época*

*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

*Pleno*

*Tomo: XI, Abril de 2000*

*Tesis: P. LX/2000*

*Página: 74*

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.** El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la **presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del **Código Nacional de Procedimientos Penales**, que a la letra establece:

ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia





De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.

[illegible]



**B.10. Folio de la solicitud 0001700359420**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Síntesis</b>                 | Número de personas investigadas en la pesquisa PGR/UEAF/014/2015-05 |
| <b>Sentido de la resolución</b> | Confirma  |
| <b>Rubro</b>                    | Información clasificada como reservada                              |

**Contenido de la Solicitud:**

"1-Quiero saber si la **averiguación previa PGR/UEAF/014/2015-05** fue consignada ante el poder judicial, indicando número de causa penal y juzgado (en caso de haber sido así). 2.-En caso de que la **averiguación PGR/UEAF/014/2015-05** haya culminado en No ejercicio de la Acción Penal, favor de precisar la fecha en la que concluyó con el NEAP. 3.-En caso de que haya tenido otro tipo de conclusión, favor de informarlo. 4.-Favor de informar **cuántas personas se investigaban en dicha indagatoria** 5.-Favor de informar el delito que se perseguía o investigaba en dicha indagatoria." (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **UEAF**.

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0224/2020:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva de la investigación que se tramita ante el Ministerio Público de la Federación de la **UEAF**, toda vez que contiene la información requerida por el particular, de conformidad con lo señalado en el **artículo 110, fracción XII** de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años, o bien, hasta que las causas que dieron origen a su clasificación subsistan.

Por tanto, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:

**De la Información Reservada**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, **como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:**



**XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y**

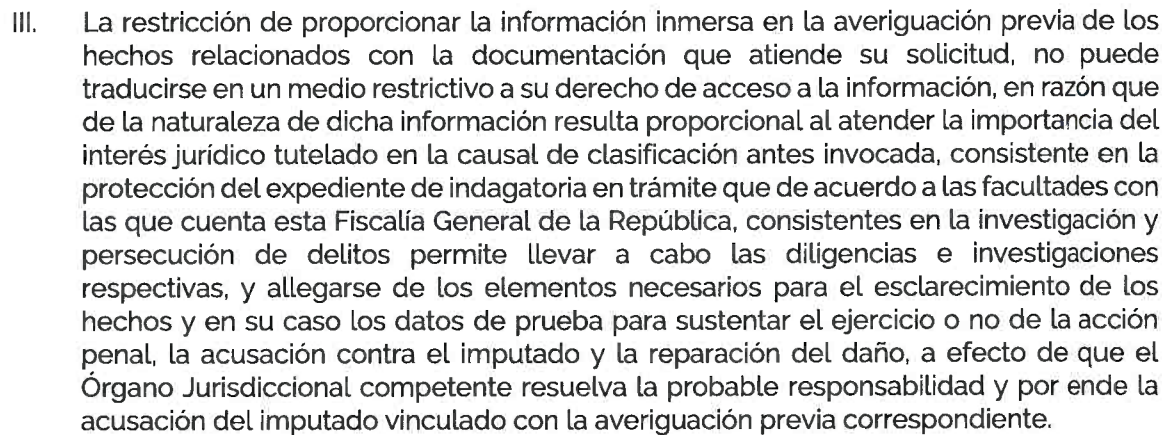
Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Trigésima Primero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

**Trigésimo primero.** De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, **podrá considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación**, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, **el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.**

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño.

- I. Es un riesgo real, toda vez que otorgar expedientes de investigación en trámite menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones en contra de miembros de la delincuencia, así como disminuir la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito, y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano Jurisdiccional competente la imputación correspondiente; un riesgo es demostrable, ya que al otorgar la información de su interés se exponería la eficacia de esta Procuraduría General de la República, en virtud que al entregar el documento podrían alterarse los medios de prueba recopilados para sustentar la mencionada formulación de la imputación respectiva; y un riesgo identificable derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con una averiguación previa en trámite que al ser difundida deja expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones que repercutirían en la vinculación a proceso y por ende la acusación contra el imputado y la reparación del daño.
- II. Es pertinente señalar que dicha reserva supera el ejercicio de los particulares del derecho de acceso a la información, toda vez que la citada clasificación atiende a la protección de un interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que la atribución de investigación y persecución de un hecho posiblemente constitutivo de delito se traduce en un medio que permite dar cuenta de sus actividades mediante misión de cumplir de manera irrestricta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos.







**B.11. Folio de la solicitud 0001700383020**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Síntesis</b>                 | Averiguación previa<br>A.P. 1235/UEIDAPLE/DA/33/2014 |
| <b>Sentido de la resolución</b> | Confirma   |
| <b>Rubro</b>                    | Información clasificada como reservada               |

**Contenido de la Solicitud:**

"Se solicita, con fundamento en los artículos 3 y 121 de la ley de amparo, **copia certificada consistente en el Dictamen en materia de Delitos Ambientales** suscrito por (...) perito oficial en materia de Delitos Ambientales adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales del Departamento de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de la República del pasado 1 de abril de 2015 en la **averiguación previa A.P. 1235/UEIDAPLE/DA/33/2014.**" (Sic)

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDF**.

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0225/2020:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva de la investigación referida en la solicitud, toda vez que la misma actualmente se encuentra en trámite e integración ante el Ministerio Público de la Federación de la **SEIDF**, de conformidad con lo señalado en el **artículo 110, fracción XII** de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años, o bien, hasta que las causas que dieron origen a su clasificación subsistan.

Por tanto, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:

**De la Información Reservada**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, **como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:**

...



**XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y**

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Trigésima Primero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

**Trigésimo primero.** De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, **podrá considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación**, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, **el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.**

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño.

- I. Es un riesgo real, toda vez que otorgar expedientes de investigación en trámite menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones en contra de miembros de la delincuencia, así como disminuir la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano Jurisdiccional competente la imputación correspondiente; un riesgo es demostrable, ya que al otorgar la información de su interés se expondría la eficacia de esta Procuraduría General de la República, en virtud que al entregar el documento podrían alterarse los medios de prueba recopilados para sustentar la mencionada formulación de la imputación respectiva; y un riesgo identificable derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con una averiguación previa en trámite que al ser difundida deja expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones que repercutirían en la vinculación a proceso y por ende la acusación contra el imputado y la reparación del daño.
- II. Es pertinente señalar que dicha reserva supera el ejercicio de los particulares del derecho de acceso a la información, toda vez que la citada clasificación atiende a la protección de un interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que la atribución de investigación y persecución de un hecho posiblemente constitutivo de delito se traduce en un medio que permite dar cuenta de sus actividades mediante misión de cumplir de manera irrestricta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de una procuración de justicia federal eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos.





- III. La restricción de proporcionar la información inmersa en la averiguación previa de los hechos relacionados con la documentación que atiende su solicitud, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la protección del expediente de indagatoria en trámite que de acuerdo a las facultades con las que cuenta esta Fiscalía General de la República, consistentes en la investigación y persecución de delitos permite llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas, y allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, a efecto de que el Órgano Jurisdiccional competente resuelva la probable responsabilidad y por ende la acusación del imputado vinculado con la averiguación previa correspondiente.



**B.12. Folio de la solicitud 0001700385620**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Síntesis</b>                 | Informes, oficios, memorándums, correos electrónicos, cables, reportes, informes homologados, requisiciones de información, presentaciones de power point, bases de datos y cualquier otro documento para la definición del diagnóstico de la situación de los servicios forenses en el país |
| <b>Sentido de la resolución</b> | Confirma   |
| <b>Rubro</b>                    | Clasificación de información como reservada  |

**Contenido de la Solicitud:**

*"Se solicita todos la versión pública de todos los **informes, oficios, memorándums, correos electrónicos, cables, reportes, informes homologados, requisiciones de información, presentaciones de power point, bases de datos y cualquier otro documento** en los términos del artículo 3 en su fracción VI **sobre la definición documento, relacionados al diagnóstico de la situación de los servicios forenses en el país** que elaboró la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y la Subprocuraduría de Derechos Humanos y de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República.*

*En conferencia de prensa se mencionó que se realizó este diagnóstico en los servicios forenses de todo el país por lo que este Sujeto Obligado debe contar con evidencia documental sobre el mismo.*

*Pido que se aplique cabalmente el artículo 133 y el artículo 143 de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como el criterio 02/17 del Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales sobre la búsqueda exhaustiva de la información.*

*Asimismo, le recuerdo a esta Institución que está obligada a entregar la información que se encuentra en su posesión, tanto la haya generado esta misma Institución, como la que haya recibido por terceros de acuerdo al artículo 4 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que dice*

*Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.*

*Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en*



*sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley.*

*De igual forma, le recuerdo a este Sujeto Obligado que se le solicitan las versiones públicas de la información, en ese sentido, deberá guiarse por los Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal emitidos por el El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para tal fin.*

*La información solicitada es de carácter público en tanto no actualiza ninguno de los supuestos para su reserva." (Sic)*

#### **Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FEMDH**.

#### **ACUERDO**

##### **CT/ACDO/0226/2019:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva de todos aquellos documentos que sirvan de insumos para obtener la versión definitiva del Diagnóstico al que hace alusión el particular, en términos del **artículo 110, fracción VIII** de la LFTAIP, **hasta por un periodo de dos años**, de conformidad con la resolución RRA 14823/19 y su acumulado RRA 14870/19.

Por ello, se trae a colación el referido precepto legal:

#### **De la Información Reservada**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, **como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:**

**VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;**

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral Vigésimo Séptimo de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señala:

**Vigésimo séptimo.** De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, **aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada.** Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente:





Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, como el que nos ocupa, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se emiten las siguientes pruebas de daño.

- I. La divulgación de los documentos requeridos, previo a que se concluya la elaboración del diagnóstico conllevaría un **riesgo real** en la dinámica del proceso deliberativo; ya que implicaría la publicidad de aquellos documentos que serán sometidos a análisis. a efecto de generar políticas públicas en torno a la temática sobre la situación en que se encuentran los Servicios Médicos Forenses y Servicios Periciales del país relativos a la desaparición forzada, aspecto que, a su vez, conllevaría un **riesgo demostrable** en la dinámica del proceso deliberativo, ya que la difusión implicaría la generación de un factor adicional que incide en la elaboración del propio diagnóstico y del **Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, (PNEIF)**; con lo cual, no se estarían garantizando las mejores condiciones para mejorar los servicios periciales y forenses en el Estado Mexicano; lo anterior, dado que **aún no se ha concluido con el análisis de las opiniones e información obtenidas derivado de la primera etapa del proceso.**

A su vez, se considera que la publicidad de los documentos solicitados, previo a que se concluyan las acciones de análisis y comparación de información conllevaría un **riesgo identificable** del proceso deliberativo: ya que, la difusión implicaría una afectación directa a las acciones desarrolladas por este sujeto obligado en conjunto con otros actores para la elaboración de resultados que permitan generar políticas públicas.

- II. En esa tesitura, el **riesgo de perjuicio** que supondría la divulgación **supera el interés público** general de que se difunda, toda vez que la información requerida, es parte de las herramientas a las que se hace referencia y las mismas se encuentran en distintas fases de elaboración, lo que implica la posibilidad de complementación, modificación o eliminación de aspectos o precisiones que al efecto pudieran ser procedentes, para mayor garantía de su eficiencia.

Por tanto, su difusión podría interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño de las herramientas en cuestión, situación que puede influir en la implementación de las acciones de política pública a desarrollar para el debido cumplimiento, en específico en cuanto a la identificación forense de personas que aún son buscadas por sus familiares.

- III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y, además, representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que se evitaría que se presentaran injerencias externas que pudieran poner en riesgo el proceso de generación del diagnóstico y de Programa en la cuestión, pues aún no se encuentra concluida.



**B.13. Folio de la solicitud 0001700395220**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Síntesis</b>                 | Investigaciones en contra del que suscribe |
| <b>Sentido de la resolución</b> | Confirma                                   |
| <b>Rubro</b>                    | Información clasificada como reservada     |

**Contenido de la Solicitud:**

**"OSCAR LÓPEZ VÉLEZ**

**"...SOLICITO se me brinde el acceso que legalmente me corresponde dentro de CUALQUIER CARPETA DE INVESTIGACIÓN QUE SE INTEGRE EN MI CONTRA, YA SEA EN ESTA FISCALÍA GENERAL A SU CARGO O EN SUS DELEGACIONES SU OFICINAS QUE TENGA EN CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA, para lo cual pido se me proporcione el número de carpetas de investigación, delito que se me imputa y demás datos necesarios para identificar la misma, así como me señale la fecha en la que se reciba mi comparecencia y en la misma se me designe abogado defensor..." (Sic)**

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **UTAG.**

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0227/2020:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la **reserva** del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación en la que se encuentre el suscrito, de conformidad con el artículo **110, fracción VII** de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de otorgar una justificación a la causal de clasificación aprobada por este Órgano Colegiado, se expone la siguiente prueba de daño:

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de un procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaría alertando al probable responsable o a sus cómplices, y con ello, podrían sustraerse de





la acción de la justicia, o alterar y destruir los medios de prueba que en su caso estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación.

Ahora bien, el negar la existencia o inexistencia de dichos procedimientos, se traduce en que el Ministerio Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de determinada persona, y con ello, se podría continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra.

- II. El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés público general, ya que todas las actuaciones de la Fiscalía General de la República tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia a favor de la sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un interés particular.
- III. La reserva del pronunciamiento de esta Fiscalía General de la República sobre la existencia o inexistencia de la información peticionada, no se traduce en un medio restrictivo al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, ya que en caso de existir alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la materia, salvaguarda el derecho de los imputados para su debida defensa y debido proceso.

En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.

La reserva del pronunciamiento de esta Fiscalía en sentido afirmativo o negativo respecto a la información peticionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para evitar su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas.

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para





todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación al interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado.

En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que únicamente se niegue la información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los intereses jurídicamente protegidos, que sea mayor al interés general de tener acceso a lo solicitado; por lo que, para la negativa de la información, es necesario que se demuestre en forma clara y debidamente sustentada el mérito de la reserva o confidencialidad de ésta.

No obstante lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo dictado por los Tribunales Colegiados de Circuito, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales:

**INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO.**

Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la CPEUM y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del CNPP, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 50., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación



frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA. Amparo en revisión 65/2016 (cuaderno auxiliar 413/2016) del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila. 26 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Guillermo Maldonado Maldonado. Secretaria: Liliانا Carmona Vega.

**AUDIENCIA DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA Y FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN. CONTRA LA OMISIÓN DE REQUERIR LA PRESENCIA FORMAL Y MATERIAL DEL IMPUTADO PARA SU CELEBRACIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO SER UN ACTO QUE TENGA UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES.** El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la CPEUM y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de sus derechos, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por lo que los actos deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo estrictamente procesal, es decir, que produzcan una afectación material de derechos sustantivos del gobernado. En efecto, los derechos afectados por el acto de autoridad deben revestir la categoría de derechos sustantivos, definición antagónica o contraria a los de naturaleza formal o adjetiva, entendidos éstos como aquellos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, si el acto reclamado es la omisión de requerir la presencia formal y material del imputado para la audiencia de cierre de la investigación complementaria y formulación de acusación, el juicio de amparo indirecto es improcedente conforme a la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el citado artículo 107, fracción V, de la propia ley, al no ser un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, porque sus consecuencias no afectan materialmente ninguno de los derechos fundamentales del quejoso tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 57/2016. 12 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Claudia Carolina Monsiváis de León.

**ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. EL DERECHO DEL IMPUTADO A OBTENER COPIA DE LA CARPETA EN LA QUE OBREN LOS REGISTROS DE INVESTIGACIÓN, OPERA A PARTIR DE QUE SEA CONVOCADO A LA AUDIENCIA INICIAL.** El artículo 218 del CNPP establece que en la etapa de investigación inicial, los registros de voz e imágenes, documentos, objetos o cosas que obren en la carpeta son estrictamente reservados; carácter que dejan de tener, cuando el imputado se encuentre detenido o comparezca a que se le reciba su entrevista; por lo que a partir de ese momento deberá brindarse el acceso a dichos registros. Por su parte, el artículo 219 del propio código dispone que será hasta que el imputado y su defensor sean convocados a la audiencia inicial que tendrán derecho a obtener copia de los registros de investigación. De esta manera, el derecho de acceso a la carpeta de investigación previsto en el artículo 218 referido, no implica que deba brindarse al imputado copia de dichas constancias, pues ese derecho opera a partir de que se le convoca a la audiencia inicial. Sin que lo anterior implique una interpretación restrictiva y retroactiva respecto a los alcances del derecho de defensa adecuada en el sistema de justicia penal acusatorio, sino que se trata del cumplimiento de las pautas que para su ejercicio estableció el legislador en relación con la expedición de copias, en atención a la calidad de la persona imputada y a la etapa en que se encuentre el procedimiento. En efecto, durante la investigación inicial formalmente no se ha imputado a la persona que se investiga; de ahí que su defensa pueda ejercerse adecuadamente con el solo acceso a la carpeta; lo que no ocurre una vez que se le ha llamado a la audiencia inicial, pues dadas las consecuencias que pudieran derivar -dictado de un auto de vinculación a proceso hace necesario que la defensa se ejerza, en caso de así solicitarlo el imputado, con copias de la carpeta de investigación. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.





**CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO.** De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la CPEUM y 61, fracción XXIII, en relación con el 50., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del CNPP define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

**CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE.** De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la CPEUM y 61, fracción XXIII, en relación con el 50., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del CNPP define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera. Esta tesis se publicó el viernes 10 de noviembre de 2017 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación.





**B.14. Folio de la solicitud 0001700395520**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Síntesis</b>                 | Investigaciones en contra del que suscribe |
| <b>Sentido de la resolución</b> | Confirma                                   |
| <b>Rubro</b>                    | Información clasificada como reservada     |

**Contenido de la Solicitud:**

**"VIVIANA CEBALLOS SOLARES**

*...me informe si en las carpetas de investigación, números de atención o cualquier otro expediente o registro de investigación, números de atención o cualquier otro expediente o registro de investigación que integran los Agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a esa Fiscalía... ..se encuentra vigente alguna indagatoria en mi contra" (Sic)*

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **UTAG.**

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0228/2020:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la **reserva** del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación en la que se encuentre el suscrito, de conformidad con el artículo **110, fracción VII** de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

Por lo que, a fin de otorgar una justificación a la causal de clasificación aprobada por este Órgano Colegiado, se expone la siguiente prueba de daño:

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de un procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaría alertando al probable responsable o a sus cómplices, y con ello, podrían sustraerse de la acción de la justicia, o alterar y destruir los medios de prueba que en su caso estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación.



Ahora bien, el negar la existencia o inexistencia de dichos procedimientos, se traduce en que el Ministerio Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de determinada persona, y con ello, se podría continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra.

- II. El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés público general, ya que todas las actuaciones de la Fiscalía General de la República tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia a favor de la sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un interés particular.
- III. La reserva del pronunciamiento de esta Fiscalía General de la República sobre la existencia o inexistencia de la información peticionada, no se traduce en un medio restrictivo al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, ya que en caso de existir alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la materia, salvaguarda el derecho de los imputados para su debida defensa y debido proceso.

En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.

La reserva del pronunciamiento de esta Fiscalía en sentido afirmativo o negativo respecto a la información peticionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para evitar su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas.

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se





utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación al interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado.

En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que únicamente se niegue la información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los intereses jurídicamente protegidos, que sea mayor al interés general de tener acceso a lo solicitado; por lo que, para la negativa de la información, es necesario que se demuestre en forma clara y debidamente sustentada el mérito de la reserva o confidencialidad de ésta.

No obstante lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo dictado por los Tribunales Colegiados de Circuito, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales:

**INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO.** Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la CPEUM y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del CNPP, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 50., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA





DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA. Amparo en revisión 65/2016 (cuaderno auxiliar 413/2016) del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila. 26 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Guillermo Maldonado Maldonado. Secretaria: Lilitana Carmona Vega.

**AUDIENCIA DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA Y FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN. CONTRA LA OMISIÓN DE REQUERIR LA PRESENCIA FORMAL Y MATERIAL DEL IMPUTADO PARA SU CELEBRACIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO SER UN ACTO QUE TENGA UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES.** El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la CPEUM y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de sus derechos, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por lo que los actos deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo estrictamente procesal, es decir, que produzcan una afectación material de derechos sustantivos del gobernado. En efecto, los derechos afectados por el acto de autoridad deben revestir la categoría de derechos sustantivos, definición antagónica o contraria a los de naturaleza formal o adjetiva, entendidos éstos como aquellos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, si el acto reclamado es la omisión de requerir la presencia formal y material del imputado para la audiencia de cierre de la investigación complementaria y formulación de acusación, el juicio de amparo indirecto es improcedente conforme a la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el citado artículo 107, fracción V, de la propia ley, al no ser un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, porque sus consecuencias no afectan materialmente ninguno de los derechos fundamentales del quejoso tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 57/2016. 12 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Claudia Carolina Monsiváis de León.

**ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. EL DERECHO DEL IMPUTADO A OBTENER COPIA DE LA CARPETA EN LA QUE OBREN LOS REGISTROS DE INVESTIGACIÓN, OPERA A PARTIR DE QUE SEA CONVOCADO A LA AUDIENCIA INICIAL.** El artículo 218 del CNPP establece que en la etapa de investigación inicial, los registros de voz e imágenes, documentos, objetos o cosas que obren en la carpeta son estrictamente reservados; carácter que dejan de tener, cuando el imputado se encuentre detenido o comparezca a que se le reciba su entrevista; por lo que a partir de ese momento deberá brindarse el acceso a dichos registros. Por su parte, el artículo 219 del propio código dispone que será hasta que el imputado y su defensor sean convocados a la audiencia inicial que tendrán derecho a obtener copia de los registros de investigación. De esta manera, el derecho de acceso a la carpeta de investigación previsto en el artículo 218 referido, no implica que deba brindarse al imputado copia de dichas constancias, pues ese derecho opera a partir de que se le convoca a la audiencia inicial. Sin que lo anterior implique una interpretación restrictiva y retroactiva respecto a los alcances del derecho de defensa adecuada en el sistema de justicia penal acusatorio, sino que se trata del cumplimiento de las pautas que para su ejercicio estableció el legislador en relación con la expedición de copias, en atención a la calidad de la persona imputada y a la etapa en que se encuentre el procedimiento. En efecto, durante la investigación inicial formalmente no se ha imputado a la persona que se investiga; de ahí que su defensa pueda ejercerse adecuadamente con el solo acceso a la carpeta; lo que no ocurre una vez que se le ha llamado a la audiencia inicial, pues dadas las consecuencias que pudieran derivar -dictado de un auto de vinculación a proceso hace necesario que la defensa se ejerza, en caso de así solicitarlo el imputado, con copias de la carpeta de investigación. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

**CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO**



**DEAMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO.** De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la CPEUM y 61, fracción XXIII, en relación con el 50., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del CNPP define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

**CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE.** De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la CPEUM y 61, fracción XXIII, en relación con el 50., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del CNPP define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querrela contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera. Esta tesis se publicó el viernes 10 de noviembre de 2017 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación.





B.15. Folio de la solicitud 0001700399520

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Síntesis                 | Probables investigaciones en contra de personas morales   |
| Sentido de la resolución | Confirma  |
| Rubro                    | Información clasificada como confidencial e incompetencia |

**Contenido de la Solicitud:**

**"¿SI LA FGR ACTUALMENTE TIENE UNA INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE LA ORGANIZACIÓN RELIGIOSA LA LUZ DEL MUNDO? ¿SI LA FGR HA REALIZADO ALGÚN CATEO A LA ORGANIZACIÓN DE LA LUZ DEL MUNDO, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA? ¿SÍ LA FGR ARRESTÓ A MIEMBROS DE LA LUZ DEL MUNDO POR Oponerse al realizar el cateo?" (Sic)**

**Unidades administrativas involucradas:**

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **UTAG.**

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0229/2020:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la confidencialidad del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna indagatoria en contra de la organización religiosa citada en la petición; lo anterior, con fundamento en el **artículo 113, fracción III** de la LFTAIP.

Toda vez que, emitir pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación relacionada con una **persona moral**, se encontraría directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el **artículo 113, fracción III** de la LFTAIP, que a la letra establece:





TÍTULO CUARTO  
INFORMACIÓN CLASIFICADA  
CAPÍTULO III  
De la Información Confidencial

**ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:**

III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

La información confidencial **no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma**, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que el Cuadragésimo de los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información*, así como la elaboración de versiones públicas, se dispone lo siguiente:

DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

**Cuadragésimo.** En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar la información por confidencialidad, no será suficiente que los particulares la hayan entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente:

- I. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y
- II. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, **jurídico** o administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona **física o moral** identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Fiscalía, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso a materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia irrevocable, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:



**CAPÍTULO II**  
**DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO**

**ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad**

*En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.*

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

*Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)  
Décima Época  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tribunales Colegiados de Circuito  
160425 1 de 3  
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036*

**DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.**

*El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.*

*Tesis Aislada  
Novena Época*



*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.  
Tomo: XIV, Septiembre de 2001  
Tesis: I.30.C.244 C  
Página: 1309*

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES.** El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

*Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.*

*Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.*

*De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.*

*Tesis Aislada  
Novena Época  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Pleno  
Tomo: XI, Abril de 2000  
Tesis: P. LX/2000  
Página: 74*

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.** El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo







Sin asuntos en la presente sesión.

[illegible]



**D. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la ampliación de término para dar respuesta a la información requerida:**

**ACUERDO**

**CT/ACDO/0230/2020:**

Los miembros del Comité de Transparencia determinan **autorizar** la ampliación del plazo de respuesta de los folios citados a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LFTAIP.

**D.1. Folio 1700700000420 - FAEFVCJC**

**D.2. Folio 0001700312120**

**D.3. Folio 0001700336420**

**D.4. Folio 0001700340420**

**D.5. Folio 0001700340720**

**D.6. Folio 0001700343420**

**D.7. Folio 0001700343530**

**D.8. Folio 0001700343620**

**D.9. Folio 0001700344620**

**D.10. Folio 0001700345620**

**D.11. Folio 0001700345920**

**D.12. Folio 0001700347820**

**D.13. Folio 0001700348920**

**D.14. Folio 0001700350020**

**D.15. Folio 0001700350220**

**D.16. Folio 0001700350920**

**D.17. Folio 0001700352020**

Lo anterior, de conformidad con los motivos que se expresan en el **Cuadro I. Solicitudes sometidas a consideración del Comité de Transparencia, para su ampliación de término para dar respuesta** que se despliega en la siguiente página.

Sin embargo, se exhorta a los asistentes a que, en aquellos requerimientos en los que, dentro del procedimiento de acceso, se encuentre pendiente por concluir el proceso de verificación de la existencia de información en sus archivos, se entregue en un término no mayor a 5 días hábiles los resultados de la búsqueda a la UTAG, con la finalidad de contestarlos en tiempo y forma. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la LFTAIP, el cual establece que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible.





**Cuadro I. Solicitudes sometidas a consideración del Comité de Transparencia, para su ampliación de término para dar respuesta**

| Solicitud  | Motivo   |
|--|--|
| <p><b>Folio 1700700000420</b>– Vencimiento 20/03/20 - <b>Fondo de Auxilio Económico a Familiares de Víctimas en Ciudad Juárez Chihuahua</b></p> <p>"Quisiera me proporcione las economías de esta entidad al cierre del ejercicio fiscal de 2019, desglosado por partida específica de acuerdo con el clasificador por objeto de gasto vigente." (Sic)</p>   | Solicitada por derivación tardía a la <b>FEMDH</b> a sugerencia de la <b>CPA</b> .                               |
| <p><b>Folio 0001700312120</b>– Vencimiento 19/03/20</p> <p>"Solicito conocer el número de personas privadas de la libertad en Centros Federales de de Readaptación Social (CEFERESOS) que se han fugado desde el 1 de enero de 2006 al 30 de enero de 2020. Solicito que se especifique la siguiente información, en caso de que exista:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•La fecha (día, mes y año) en que cada una de las personas se fugó del centro de reclusión</li><li>•El delito que se le imputaba o por el que se le había decretado privación de la libertad</li><li>•Si pertenecían a un grupo de la delincuencia organizada</li><li>•Si la persona ya ha sido capturada nuevamente o continúa prófuga" (Sic)</li></ul> <p><b>Requerimiento de información Adicional:</b></p> <p>"...relacionados al número y nombre de las organizaciones del crimen organizado, carteles de narcotráfico y/o células delictivas que actúan y/o han actuado en el territorio nacional en el último año y que han sido identificados y/o reconocidas por esta institución..."(Sic)</p> | Solicitada por búsqueda de la información en la <b>CMI</b>   |
| <p><b>Folio 0001700336420</b>– Vencimiento 18/03/20</p> <p>"ANTECEDENTES 2008 JALISCO Monterrey, N. L. Mex, cel. 8186045116 tel. fax (81)8371 6757 Ommar09@gmail.com OMAR JOSUE MUÑIZ ROSALES ante Usted con el debido respeto comparezco exponer:Por medio del presente escrito acudo a solicitar acceso a información respecto a detención el día 20 de julio de 2008 en el estado de Jalisco por delitos contra la salud, así mismo si se inicio una averiguación previa así como si fue consignada al Poder Judicial. De modo que surtan los efectos correspondientes.Con fundamento en los artículos 1º, 8º, y en el dispositivo 20º apartado B, fracción VIII, IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic).</p>   | En virtud de que la <b>UTAG</b> se encuentra realizando un análisis a las respuestas de la <b>SCRPPA y CMI</b> . |



|  |  |
|--|--|
| <p><b>Folio 0001700340420</b>– Vencimiento 17/03/20</p> <p>"Solicito se me informe cuántas averiguaciones previas y cuántas carpetas de investigación ha abierto en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y cuántas tiene activas actualmente (investigación en curso) la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, de la Fiscalía General de la República" (Sic)</p>   | <p>Solicitada por <b>SEIDF</b>, toda vez que se encuentra realizando una búsqueda exhaustiva de la información.</p>            |
| <p><b>Folio 0001700340720</b>– Vencimiento 17/03/20</p> <p>"1. ¿Cuál es el presupuesto asignado anual de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020? 2. ¿Cuál es el presupuesto asignado anual en específico al capítulo 1000 de Servicios Personales de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020? 3. ¿Cuál es el mecanismo de reclutamiento, selección y admisión del personal? 4. ¿Cuántas convocatorias de admisión de personal se publicaron en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020? 5. Indicar el número de puestos publicados para admisión en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 6. Indicar el número de puestos vacantes en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 7. Indicar el número de bajas de personal de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 8. ¿Cuántos puestos publicados en concurso para admisión fueron declarados desiertos o anulados de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020? 9. ¿Cuántos servidores públicos fueron promovidos en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020? 10. ¿Cuántos puestos publicados fueron declarados con un ganador en los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020? 11. ¿Cómo contribuyen los servidores públicos a preservar la autonomía de la institución? Muchas gracias, saludos." (Sic)</p> | <p>Solicitada por <b>CPA</b>, toda vez que se encuentra realizando una búsqueda exhaustiva de la información</p>               |
| <p><b>Folio 0001700343420</b>– Vencimiento 18/03/20</p> <p>"Con base en mi derecho a la información, solicito conocer el monto económico que se ha destinado por el pago del bono de puntualidad por llegar a tiempo a laborar, de 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Favor de detallar el monto total y el número de trabajadores que recibieron este bono." (Sic)</p>  | <p>Solicitada por la <b>CPA</b>, toda vez que se encuentra realizando una búsqueda exhaustiva de la información requerida.</p> |
| <p><b>Folio 0001700343520</b>– Vencimiento 18/03/20</p> <p>"Con base en mi derecho a la información, solicito conocer el monto económico que se ha destinado por el pago del bono de puntualidad por llegar a tiempo a laborar, de 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Favor de detallar el monto total y el número de trabajadores que recibieron este bono." (Sic)</p>  | <p>Solicitada por la <b>CPA</b>, toda vez que se encuentra realizando una búsqueda exhaustiva de la información requerida.</p> |
| <p><b>Folio 0001700343620</b>– Vencimiento 18/03/20</p> <p>"Con base en mi derecho a la información, solicito conocer el monto económico que se ha destinado para bono de puntualidad por llegar a tiempo a laborar, de 1 de enero al 31 de diciembre de</p>   | <p>Solicitada por la <b>CPA</b>, toda vez que se encuentra realizando una búsqueda exhaustiva de la información requerida.</p> |



|   |   |
|---|---|
| 2019. Favor de detallar el monto total y el número de trabajadores que recibieron este bono." (Sic).  |   |
| <b>Folio 0001700344620</b> – Vencimiento 18/03/20<br><br>"solicito el número de capacitaciones que ha tomado el personal para atender a personas LGBTTIQ solicito los datos de los años 2015 2016 2017 2018 2019 y 2020 . solicito los datos desagregados por año LGBTTIQ son siglas de : L - Lesbiana Mujer que se siente atraída emocional, afectiva, romántica y/o sexualmente por otra persona de su mismo género. G - Gay Atracción emocional, afectiva y/o sexual que tiene una persona hacia otras de su mismo género. El activista Asier Santamaría explica que prefiere este término antes que homosexual porque este último se ha utilizado para patologizarnos. T - Transexual o transgénero Identidad de género que recoge a las personas que se identifican con el género opuesto al de su género asignado al nacer y requiere de un proceso físico de hormonación (no necesariamente de cirugía de reasignación). B - Bisexualidad Capacidad de sentir atracción romántica, afectiva y/o sexual por personas de más de un género/sexo no necesariamente al mismo tiempo, no necesariamente de la misma manera y no necesariamente en el mismo grado ni con la misma intensidad. I - Intersexual Persona que nace con características sexuales (como cromosomas, genitales y/o estructura hormonal) consideradas de uno u otro género. Algunos médicos aconsejan a los padres de bebés intersexuales practicarles intervenciones quirúrgicas para eliminar alguna de estas características pero existe un riesgo alto para los bebés intersexuales que no han manifestado su verdadera identidad sexual. Q - Queer Término acuñado para definir a todas aquellas personas que no quieren clasificarse bajo etiquetas tradicionales por su orientación e identidad sexual. Lo queer deconstruye la sexualidad normativa y traspasa lo socialmente aceptado, esto es, la vida heterosexual, monógama, con personas de edad similar y clase social." (Sic). | Solicitada por <b>CPA</b> , toda vez que se encuentra realizando una búsqueda exhaustiva de la información. |
| <b>Folio 0001700345620</b> – Vencimiento 18/03/20<br><br>"solicito el número de capacitaciones que ha tomado el personal para atender a personas LGBTTIQ El término LGBTIQ está formado por las siglas de las palabras lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer" (Sic).  | Solicitada por <b>CPA</b> , toda vez que se encuentra realizando una búsqueda exhaustiva de la información. |
| <b>Folio 0001700345920</b> – Vencimiento 18/03/20<br><br>"solicito el número de capacitaciones que ha tomado el personal para atender a personas LGBTTIQ solicito los datos de los años 2015,2016,2017,2018,2019 y 2020 solicito los datos desagregados por año El término LGBTIQ está formado por las siglas de las palabras lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer." (Sic)   | Solicitada por <b>CPA</b> , toda vez que se encuentra realizando una búsqueda exhaustiva de la información. |
| <b>Folio 0001700347820</b> – Vencimiento 19/03/20   | Solicitada por falta de respuesta <b>FECC</b> .   |





|  |   |
|--|---|
| <p><b>"VERSION PUBLICA DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN<br/>FED/FECC/FECC-COL/0000376/2019</b><br/>Dicha carpeta se inició por un supuesto delito de uso indebido de atribuciones y facultades previsto en el artículo 217 del Código Penal Federal cometido en 2011. Dicho delito prescribió en mayo de 2017." (Sic)</p>  |   |
| <p><b>Folio 0001700348920</b>– Vencimiento 19/03/20</p> <p>"REQUIERO DE LA AP 6897/FEDPI/96 LO SIGUIENTE 1.- COPIA CERTIFICADA DE LAS PRIMERAS 25 HOJAS DEL EXHORTO 1126/97-X SOBRE LA OBRA ENTRE MUJERES DE SANTIAGO MONCADA OBTENIDA DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE ESPAÑA, POR UN JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS DE MADRID. 2.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO COMPLETO OBTENIDO DE LA COMISARÍA DE LA POLICÍA CIENTÍFICA DE MADRID SOBRE EL INFORME PERICIAL 2009D0193 REALIZADO POR EL FUNCIONARIO 153. 3.- COPIA CERTIFICADA DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO JORGE IBARGÜENGOITIA 1990 CONVOCADA POR EL FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO. 4.- COPIA CERTIFICADA DE LA CONSTANCIA EMITIDA POR EL FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO DIRIGIDA A LA QUE ESTO SUSCRIBE EN EL QUE SE ACREDITA HABER INGRESADO AL CONCURSO SEÑALADO ANTERIORMENTE, EN 1990, FIRMADO POR EL LIC. SERGIO VELA MARTÍNEZ. 5.- INHABILITACIÓN DEL MP RODOLFO GARÍN BAÑUELOS. 6.- ÚLTIMO TRÁMITE EN EL QUE SE NOTIFICA AL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL LA RESOLUCIÓN SOBRE EL JUICIO DE AMPARO 996/2002, RELATIVO A LA AVERIGUACIÓN PREVIA CITADA AL RUBRO, ASÍ COMO AQUELLA APORTADA POR EL PROPIO JUZGADO A ESA UNIDAD ESPECIALIZADA. 7.- COPIA CERTIFICADA DE LA OBRA ESCRITA POR ADRIANA RUIZ DE TERESA Y ENTREGADA EN 1996 AL MP ANTE LA APERTURA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y QUE FUE LA QUE SE PRESENTÓ EN EL CONCURSO CON MODIFICACIONES A LA REGISTRADA EN EL INDAUTOR BAJO EL NUMERO 8182/90. 8.- ENNUMERACIÓN DE LAS DILIGENCIAS REALIZADAS A LA AVERIGUACIÓN PREVIA FED/SEIDF/UNAI-CDMC/0002114/2016 Y ESTADO QUE GUARDA. EN LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA FGR, justificación de no pago: SOLICITO QUE ME SEA EXENTADO EL PAGO DE LA REPRODUCCIÓN DE LA RESPUESTA" (Sic)</p> | <p>Solicitada por <b>SEIDF</b>, toda vez que se encuentra realizando una búsqueda exhaustiva de la información.</p> <p>Aunado a que se someterá a consideración del Comité de Transparencia en la próxima sesión.</p> |
| <p><b>Folio 0001700350020</b>– Vencimiento 20/03/20</p> <p>"Solicito todos los documentos, en cualquier formato, pertenecientes en su totalidad o en parte a las reuniones del Diálogo Annual Bilateral de Alto Nivel sobre Derechos Humanos. Un iniciativa entre México y los Estados Unidos, se lanzó una serie de reuniones el febrero de 2010 con el propósito de fortalecer de fortalecer su labor en la búsqueda de soluciones a los retos</p>   | <p>Solicitada por análisis a la respuesta de la <b>CAIA</b> y consideración del Comité de Transparencia.</p>  |



globales y regionales de derechos humanos, equidad de género, y la promoción de la democracia en el mundo y particularmente en nuestro hemisferio. Han acontecido reuniones anuales incluso en las siguientes fechas

- 12 de febrero de 2010 en la Ciudad de México
- durante el año 2011 en Washington, D.C., EEUU
- durante el año 2012 en la Ciudad de México
- 21 de marzo de 2013 en Washington, D.C., EEUU
- en abril de 2014 en la Ciudad de México
- 21 de octubre de 2015 en Washington, D.C., EEUU
- 27 de octubre de 2016 en la Ciudad de México
- 8 de diciembre de 2017 en Washington, D.C., EEUU
- en los años 2018 y 2019

Como se puede notar en el Comunicado No. 466 por la Secretaría de Relaciones Exteriores (véanse Anexo 1), la delegación mexicana han incluido miembros como el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Embajador de México ante los Estados Unidos. También han participado funcionarios y funcionarias de las Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina, así como de la Procuraduría General de la República.

Dado la conexión directa entre este mitin con la protección de los derechos humanos, incluso esfuerzos o acciones para prevenir y erradicar violaciones de los derechos humanos y las políticas asociadas, solicito información bajo la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El Artículo 8 estipula que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Además, el Artículo 99 (V) estipula que los documentos clasificados como reservados serán desclasificados cuando Se trate de información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

Anexo 1 <https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-estados-unidos-fortalecen-el-dialogo-y-la-cooperacion-bilateral-para-proteger-y-promover-los-derechos-humanos> (Sic)

**Folio 0001700350220**– Vencimiento 20/03/20

"Solicito el nombre del encargado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) así como su domicilio, a efecto de que el personal a su digno cargo me haga llegar, del día 23 de agosto de 2019 entre las 18:30 y las 22:00 horas lo siguiente: a) video de vigilancia de entrada a sus instalaciones. b) video de vigilancia de Ventanilla Única de dicha Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) c) libros de registro de las

Solicitada por análisis a la respuesta de **CPA** y someterla a consideración del Comité de Transparencia en la próxima sesión.



|   |   |
|---|---|
| personas que ingresaron a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). (Sic)   |   |
| <b>Folio 0001700350920</b> – Vencimiento 20/03/20<br><br>"- Informe el número de carpetas de investigación que ha iniciado la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, de diciembre de 2018 a la fecha. - Clasifique por delito esta información - Clasifique por mes esta información - Informe el número de funcionarios públicos a quienes se les ha iniciado una carpeta de investigación, en la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, de diciembre de 2018 a la fecha. - Clasifique por dependencia esta información - Informe el número de empresas que han sido denunciadas, ante la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, de diciembre de 2018 a la fecha. - Informe el número de vinculaciones a proceso que obtuvo la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, de diciembre de 2018 a la fecha. - Informe el número de sentencias que obtuvo la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, de diciembre de 2018 a la fecha." (Sic) | Solicitada por falta de respuesta de FECC.  |
| <b>Folio 0001700352020</b> – Vencimiento 23/03/20<br><br>"Por medio del presente solicito la información correspondiente a las siguientes remuneraciones del personal con que cuenta su Dependencia, que a continuación se describe, presentado en Excel y desglosado por la cantidad o el monto numérico de la cifra del pago de cada uno de los siguientes seguros o pagos homólogos a 1. Monto de la prestación del seguro de vida por muerte natural; 2. Monto de la prestación del seguro de vida por muerte accidental; 3. Monto de la prestación de marcha; 4. Monto de la prestación de ayuda para gastos funerarios; y 5. U otros relacionados en el rubro de seguro de vida y prestaciones por defunción. La información se solicita de forma desglosada por cada puesto correspondiente a elementos de seguridad, incluyendo 1.Nombre del puesto y2.Remuneración mensual de cada puesto. Gracias.Se solicita la información en tabla de Excel y con montos en numérico en cada columna de las prestaciones descritas con antelación, para tales efectos, se adjunta a la presente un ejemplo en PDF de la tabla en comento. Saludos" (Sic)   | Solicitada por CPA<br><br>Toda vez que se encuentra realizando una búsqueda exhaustiva de la información. |





**E.1. Folio 00017000381620 – RRA 14823/19**

La resolución adoptada por unanimidad por los miembros del Comité de Transparencia se encuentra al final de la presente acta.

[illegible]

113





Siendo las 13:49 horas del mismo día, se dio por terminada la Décima Sesión Ordinaria del año 2020 del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República. Al efecto, se elabora acta por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia.

**INTEGRANTES**

**Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.**

Suplente de la Presidenta del Comité de Transparencia.

**Mtro. Ray Manuel Hernández Sánchez**  
Suplente del Director General de Recursos  
Materiales y Servicios Generales,  
representante del área coordinadora de  
archivos

**Lic. Gerardo Vázquez González de la Vega**  
Suplente del Titular del Órgano  
Interno de Control

**Lcda. Gabriela Santillán García.**  
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia  
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental  
**Elaboró**